

Trabajo Fin de Grado

Criptomonedas:
fiscalidad de una nueva realidad jurídica

*Cryptocurrencies:
taxation of a new legal reality*

Autor/es

Patricia Lacal Romero

Director/es

Lucía María Molinos Rubio

Facultad de Derecho
2018-2019

ÍNDICE

ABREVIATURAS	3
I. INTRODUCCIÓN	5
1. CUESTIÓN TRATADA EN EL TRABAJO	5
2. RAZÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA	5
3. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO	6
II. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO	7
1. DINERO: CONCEPTO Y EVOLUCIÓN	7
2. CRIPTOMONEDAS: LA REINVENCION DEL DINERO	8
2.1 <i>¿Qué son las criptomonedas?</i>	8
2.2 <i>Comparativa: monedas tradicionales vs. criptomonedas</i>	12
2.3 <i>Naturaleza jurídica: ¿Criptomonedas como medio de pago?</i>	13
2.4 <i>Situación jurídica actual</i>	15
III. LAS CRIPTOMONEDAS EN LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES	17
1. EUROPA	17
1.1 <i>Pronunciamientos de las autoridades europeas ante la ausencia legislativa</i>	18
1.2 <i>Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Quinta, de 22 de octubre de 2015, Asunto C-264/14 (Skatteverket / David Hedqvist).</i>	19
1.3 <i>Normativa tributaria: divergencias entre Estados miembros de la UE</i>	24
2. TRATO FISCAL EN TERCEROS ESTADOS	27
2.1 <i>Estados Unidos</i>	28
2.2 <i>Australia</i>	30
2.3 <i>China</i>	31
2.4 <i>Tailandia</i>	32

IV. ORDENAMIENTO JURÍDICO TRIBUTARIO ESPAÑOL.....	32
1. CONSIDERACIONES PREVIAS	32
1.1 Situación jurídica: adecuación de la normativa tributaria vigente.....	32
1.2 Plan de Control Tributario (2018-2019)	33
2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)	34
2.1 Compraventa de criptomonedas con dinero de curso legal.....	34
2.2 Compraventa de criptomonedas con criptomonedas (permuta).....	40
2.3 Criptomonedas como retribución: minado	41
3. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO (IP): TENENCIA DE CRIPTOMONEDAS	42
4. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE): MINADO, TRANSMISIÓN O INTERMEDIACIÓN DE COMPRAVENTA E INTERCAMBIOS DE CRIPTOMONEDAS	44
5. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS): COMPRAVENTA DE CRIPTOMONEDAS Y MINADO.....	46
6. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA)	47
6.1 Compraventa de / con criptomonedas.....	47
6.2 Minado	48
V. CONCLUSIONES	49
BIBLIOGRAFÍA	53

ABREVIATURAS

ABE	Autoridad Bancaria Europea
AEAT	Agencia Estatal de Administración Tributaria
Art.	Artículo
BCE	Banco Central Europeo
BE	Banco de España
CC	Código Civil
CE	Comisión Europea
Cfr.	Confróntese
CFTC	Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías (<i>Commodity Futures Trading Commission</i>)
CV	Moneda virtual (<i>virtual currency</i>)
DGT	Dirección General de Tributos
EEUU	Estados Unidos
Ex. art.	Según el artículo
FinCEN	Red de Control de Delitos Financieros (<i>Financial Crimes Enforcement Network</i>)
IAE	Impuesto sobre Actividades Económicas
IP	Impuesto sobre el Patrimonio
IRPF	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
IS	Impuesto sobre sociedades
IVA	Impuesto sobre Valor Añadido
JPY	Yen japonés
LIP	Ley del Impuesto sobre el Patrimonio
LIRPF	Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
LIS	Ley del Impuesto sobre Sociedades
LIVA	Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido

Núm.	Numero
NYDFS	Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (<i>New York Department of Financial Services</i>)
OCC	Oficina del Contralor de la Moneda (<i>Office Comptroller of Currency</i>)
p.	Página
P2P	Entre pares (Peer to peer)
PE	Parlamento Europeo
pp.	Páginas
RDL	Real Decreto Legislativo
SEC	Comisión de Bolsa y Valores (<i>Securities and Exchange Commission</i>)
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TRLRHL	Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
UE	Unión Europea
UEM	Unión Europea Monetaria
USD	Dólar estadounidense (<i>United States Dollars</i>)
v. gr.	Por ejemplo
vs.	Versus

I. INTRODUCCIÓN

1. CUESTIÓN TRATADA EN EL TRABAJO

El presente trabajo trata de visibilizar el problema existente derivado de la falta de regulación de las criptomonedas en la actualidad, así como las soluciones doctrinales y jurisprudenciales dadas al respecto, tanto a nivel nacional como supranacional.

Pese a haber surgido en 1998, y tras su auge a partir de la crisis financiera de 2008, no existe en España, ni en la Unión Europea, una normativa específica que regule su naturaleza jurídica, las operaciones y actividades legalmente aceptadas para su uso en el mercado, ni tampoco su régimen tributario. Razón por la cual se han originado múltiples controversias en la práctica jurídica, ya sean penales, mercantiles o tributarias.

El objeto de este trabajo consiste en el análisis de las diversas soluciones propuestas por las autoridades e instituciones españolas e internacionales, en particular, en el ámbito fiscal. No obstante, con carácter previo se realiza un estudio de la situación jurídica de otros Estados, aportando así una perspectiva más amplia de la respuesta que, a nivel internacional, se ha dado hasta el momento.

2. RAZÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA

La elección del tema objeto de estudio de este trabajo responde a una motivación personal, puesto que, siempre he manifestado un especial interés por todo aquello relacionado con la tecnología y su aplicación social. Asimismo, se trata de una cuestión que abarca diferentes campos, incluyendo el económico y el legal. Es por ello que me resulta interesante y me permite profundizar e investigar ambas materias, logrando un mayor desarrollo interdisciplinar y aportándome una visión más amplia de la aplicación del Derecho y su relación con la Economía, así como aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de mi trayectoria universitaria en ambas disciplinas.

Si bien es cierto que, como consecuencia de su atractivo y novedad, se han elaborado numerosos trabajos al respecto, considero que es importante estudiar cómo desde las instituciones, nacionales e internacionales, se dedica un esfuerzo adicional para dar solución a un nuevo fenómeno económico que está cambiando el modo de operar en el mercado y de actuar de los agentes económicos.

3. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO

La metodología empleada en el presente trabajo ha sido la que a continuación se expone.

En primer lugar, con el fin delimitar el concepto de criptomoneda, su naturaleza jurídica y sus principales características se ha realizado un análisis de los pronunciamientos efectuados por diversas autoridades.

En segundo lugar, debido al carácter eminentemente económico inherente a las mismas y su trascendencia en una futura regulación como consecuencia de su gran volatilidad, se ha practicado un análisis económico – financiero. El objetivo perseguido consistía en evidenciar las pronunciadas alteraciones de valor de las criptomonedas, puesto que, los pronunciamientos de las instituciones españolas han seguido una misma tendencia, la alerta y precaución por sus abruptos cambios de valor, siendo posible que sea este uno de los principales aspectos a abordar en materia legislativa.

En tercer lugar, se ha aplicado un método analítico o jurídico-descriptivo para conocer y confrontar el régimen jurídico tributario de las criptomonedas en otros Estados, tanto de la Unión Europea, como de fuera de sus fronteras.

En cuarto lugar, se ha estudiado en detalle la legislación española, la jurisprudencia europea y los pronunciamientos acerca de los criterios interpretativos de la Dirección General de Tributos con el objeto de determinar la tributación de las operación de criptomonedas en España a efectos de los siguientes impuestos: : i) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF); ii) Impuesto sobre el Patrimonio (IP); iii) Impuesto sobre actividades económicas (IAE); iv) Impuesto sobre Sociedades (IS) y; v) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

En quinto y último lugar, se han extraído las principales conclusiones del presente trabajo, de acuerdo con los criterios legales desarrollados a lo largo del mismo.

Para todo ello, se han consultado diferentes fuentes de información, desde manuales y revistas en materia tributaria, civil y mercantil, legislación, jurisprudencia y pronunciamientos de autoridades e instituciones nacionales e internacionales. Asimismo, ha sido necesario consultar informes y manuales de ámbito técnico, en concreto de la disciplina de ingeniería, para estudiar determinados aspectos del funcionamiento de las criptomonedas.

II. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO

Previo al estudio de las implicaciones jurídicas de las operaciones relativas a las criptomonedas, objeto principal del presente trabajo, resulta indispensable conocer las nociones elementales de las mismas, en concreto: i) qué se entiende por criptomoneda y; ii) cuáles son sus atributos propios que las distinguen de las monedas tradicionales.

Con el fin de concluir si a día de hoy las criptomonedas pueden ser consideradas dinero de curso legal o, por el contrario, no disponen de tal cualidad, se analizará, en primer lugar, el dinero en términos generales, para, *a posteriori*, realizar una comparativa de los caracteres intrínsecos de las criptomonedas que determinarán su naturaleza.

1. DINERO: CONCEPTO Y EVOLUCIÓN

Siguiendo la estructura del análisis deductivo, se dará comienzo al trabajo reflexionando sobre el concepto y evolución del dinero, aspectos necesarios para comprender los pronunciamientos de las autoridades e instituciones en relación con las criptomonedas.

De acuerdo con la definición elaborada por el Banco de España, el dinero es «el medio legal para realizar los pagos, que se representa por medio de monedas o billetes y se usa como unidad de medida en las transacciones económicas».¹

De forma más concreta, ha venido a establecer lo siguiente: será dinero cualquier bien que sea universalmente aceptado por todos los individuos que formen parte de una misma zona geográfica (medio de pago), que se caracterice por la durabilidad o permanencia en el tiempo permitiendo el ahorro (depósito de valor) y que sea una unidad de medida en la que se expresen los precios de todos los bienes y servicios (unidad de cuenta).

Definición de la cual se pueden extraer las funciones del dinero: i) medio de pago; ii) depósito de valor y; iii) unidad de cuenta.

En lo que respecta a su evolución, el dinero ha experimentado una notable transformación a lo largo de la historia. Primero, se empleó el dinero mercancía, esto es, objetos cuyo valor radica en el propio bien, como las conchas o las monedas de oro. *A posteriori*, fue

¹ Banco de España (2017), «Estabilidad del sistema financiero» [consultado 8 de marzo de 2019]. Disponible en: http://aulavirtual.bde.es/wav/es/menu/estabilidad_fina/Estabilidad_del_8af3c721ff0b651.html

sustituido por el dinero representativo, definido como el papel moneda respaldado por metal, pudiendo ser intercambiable por oro y plata. Por último, el dinero fiduciario, el cual carece de valor intrínseco y es otorgado por una autoridad monetaria que lo respalda. Su característica principal es su fundamento en la confianza de los individuos.

No obstante, en los últimos años ha surgido un nuevo concepto, el dinero digital o electrónico. De acuerdo con el Banco de España, el dinero electrónico se define como «sustitutivo de las monedas y los billetes de banco, almacenado en un soporte electrónico como, por ejemplo, una tarjeta inteligente y que, en general, está pensado para efectuar pagos electrónicos de cuantía limitada»². Por tanto, a día de hoy, el dinero puede existir con independencia de su representación física.

Actualmente, confluyen, incluso, monedas digitales descentralizadas, denominadas criptomonedas, las cuales son objeto del presente trabajo, sin embargo, no son consideradas, por el momento, dinero legal.

2. CRIPTOMONEDAS: LA REINVENCIÓN DEL DINERO

Con el fin de facilitar la comprensión de los siguientes apartados del trabajo en relación con la tributación de las criptomonedas, en este epígrafe se expondrán, por un lado, el concepto y los caracteres fundamentales, así como los elementos propios que las diferencian de las monedas tradicionales de curso legal; por otro, su posibilidad de empleo como medio de pago y una breve introducción a la situación jurídica actual.

2.1 ¿Qué son las criptomonedas?

Debido a la complejidad del concepto y su elevado componente técnico, existen ciertas nociones que deben dominarse para comprender qué es una criptomoneda. Por ello, en este apartado se incluyen los términos esenciales que sirven como base para entender el concepto y las características mas relevantes de las criptomonedas.

A) *Dinero electrónico*: «Valor monetario almacenado por medios electrónicos que represente un crédito sobre el emisor, que se emita al recibo de fondos para efectuar

² Banco de España (2017), «Estabilidad del sistema financiero» [consultado 8 de marzo de 2019]. Disponible en: http://aulavirtual.bde.es/wav/es/menu/estabilidad_fina/Estabilidad_del_8af3c721ff0b651.html

operaciones de pago y que sea aceptado por una persona física o jurídica distinta del emisor».³ Esto es, cualquier medio de intercambio en forma electrónica (v. gr.: PayPal).

B) Moneda virtual o divisa virtual (CV): «Representación digital de valor no emitida por un Banco Central ni por una autoridad pública, ni necesariamente asociada a una moneda fiduciaria, pero aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de pago y que puede transferirse, almacenarse o negociarse por medios electrónicos».⁴ Sin embargo, el BCE considera necesario modificar esta definición, por motivos que a continuación se exponen⁵: i) las CV no son consideradas monedas por la UE,⁶ ni tampoco dinero legal; ii) el euro es la moneda única de UEM⁷ y; iii) es más preciso considerarlas medio de intercambio que medio de pago⁸.

Tomando en consideración las precisiones realizadas, el BCE propone una nueva redacción: «Representación del valor no emitido por un Banco Central ni por una autoridad pública, ni necesariamente asociada a una moneda fiduciaria, que no posee el estatus legal de la moneda o el dinero, pero es aceptado por personas físicas o jurídicas, como medio de intercambio y posiblemente también para otros fines, y que puede transferirse, almacenarse o negociarse por medios electrónicos»⁹.

Tras ser estudiados los conceptos enumerados, es posible comprender la definición de criptomoneda.

³ Ex. art. 1.2 Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico. Transposición art. 2 Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades.

⁴ Ex. art.1.2 c) Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica la Directiva 2009/101/CE.

⁵ Conclusiones del BCE, de 12 de octubre el año 2016, a propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva (UE) 2015/849.

⁶ Ex. art. 2 a) Directiva 2014/62 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo 2014 sobre la protección del euro y otras monedas contra la falsificación por la ley penal, y sustituye la Decisión marco 2000/383 / JAI del Consejo

⁷ Ex. art. 3.4 TUE, art. 119.2 TFUE y art. 2 Reglamento (CE) n.o 974/98 del Consejo, de 3 de mayo de 1998, sobre la introducción del euro.

⁸ En la postura contraria se muestra el TJUE en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Quinta, de 22 de octubre de 2015, Asunto C-264/14 (Skatteverket / David Hedqvist).

⁹ En este sentido: NIETO GIMÉNEZ-MONTESINOS y M.A., HERNÁEZ MOLERA, J., «Monedas virtuales y locales: las paramonedas, ¿Nuevas formas de dinero?», en *Revista De Estabilidad Financiera*, [revista electrónica], n. 35, 2018 [consultado 12 de marzo de 2019]. Disponible en: https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/RevistaEstabilidadFinanciera/18/NOVIEMBRE/Monedas_virtuales_y_locales_las_paramonedas.pdf

C) *Criptomonedas*: divisa virtual (CV) con valor equivalente en moneda fiduciaria e intercambiable para realizar transacciones en la economía real; sin autoridad central que ejerza funciones de administración y supervisión, pudiendo ser creada y controlada por los propios usuarios de la red y; fundamentada en criptografía. Su tributo principal es que son totalmente identificables e irrepetibles, esto es, cada una se crea y se protege en una cadena de bloques mediante un sistema criptográfico, adquiriendo su propia identificación única¹⁰. Es decir, se diferencian del resto de CV, principalmente, por su creación y funcionamiento mediante criptografía¹¹ y el uso de redes P2P¹².

En síntesis, las criptomonedas son divisas virtuales, empero no dinero electrónico¹³. A *fortiori*, una CV puede ser o no criptomoneda, en función de si tiene un emisor concreto y emplea criptografía para su desarrollo.

La conclusión que se debe extraer de este apartado es la siguiente: no puede afirmarse que las criptomonedas, actualmente, sean monedas o dinero de curso legal¹⁴, puesto que,

¹⁰ Cfr. SIVAKUMAR BASHIR, «¿Qué hace que las criptomonedas sean únicas?», en *Criptomonedas: la guía definitiva para cadena de bloque (blockchain), minería y más* [libro electrónico], Babelcube, Inc, España, 2019 [consultado 3 de junio de 2019]. Disponible en: https://books.google.es/books?id=Vs6IDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summ ary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

¹¹ «Proceso de envío y recepción de mensajes donde los mensajes se codifican o cifran mediante códigos secretos que solo pueden ser decodificados o descifrados para que los destinatarios los puedan interpretar correctamente. Con la criptografía, solo las partes vinculadas en la actividad de comunicaciones pueden comprender los mensajes enviados y recibidos». Fuente: FUNDACIÓN TELEFÓNICA., «La Sociedad de la Información en España 2006», Ariel SA, Barcelona, 2006, p. 158.

¹² «En una red P2P todos los componentes de la red tienen funciones similares, por lo que asumen a la vez los roles de servidor y cliente. Hasta el momento las redes P2P se han utilizado primordialmente como medio de distribución de ficheros (redes BitTorrent, eDonkey, FastTrack o Gnutella)». Fuente: SIVAKUMAR BASHIR, *Criptomonedas: la guía definitiva para cadena de bloque (blockchain), minería y más* [libro electrónico], Babelcube, Inc, España, 2019 [consultado 3 de junio de 2019]. Disponible en: https://books.google.es/books?id=Vs6IDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summ ary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

¹³ Cabe recordar que, en este sentido se ha pronunciado el Banco Central Europeo afirmando que las divisas virtuales, con independencia de que pertenezcan a la subcategoría de criptomonedas, no son consideradas dinero electrónico, debido a que, principalmente, no poseen el estatus legal de dinero.

¹⁴ Entre otros Gil Soriano, «Desde un punto de vista económico, y paradójicamente, las monedas virtuales no reúnen las características clásicas de una moneda fiduciaria [...]: 1) medio de cambio, 2) unidad de cuenta; y 3) depósito de valor. En la actualidad, las monedas virtuales tienen una limitada función como medio de cambio en tanto que tienen un reducido nivel de aceptación entre el público. Su alta volatilidad, [...], hace imposible que sea un depósito de valor, ni siquiera a corto plazo». GIL SORIANO, A. «Monedas virtuales: aproximación jurídico-tributaria y control tributario», en *Actualidad jurídica Uría Menéndez* [revista electrónica], n. 48, 2018 [consultado 21 de mayo de 2019]. Disponible en: https://www.uria.com/documentos/publicaciones/5803/documento/foro_esp_02.pdf?id=7879

son un tipo de divisas virtuales¹⁵ y estas no pueden considerarse como tal; tampoco que sean dinero electrónico, ya que no cumplen los requisitos legales para ello¹⁶.

¹⁵ En este sentido José Pedreira Menéndez, «la Unión Europea quiere integrar a las monedas virtuales dentro del sistema financiero, siguiendo así la calificación de divisas virtuales que ya les había otorgado la Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de octubre de 2015 [...]. En definitiva, la naturaleza jurídica que se le quiere otorgar a las monedas digitales es la de una divisa virtual». PEDREIRA MENÉNDEZ, J. «Consideraciones sobre la tributación y la calificación contable de las operaciones con moneda digital (Bitcoins) en las empresas», en *Revista Quincenal Fiscal* [revista electrónica], n. 3, 2018 [consultado 28 de abril de 2019]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6287832>

¹⁶ «La definición legal de dinero electrónico [...] se basa en tres criterios, de manera que todo aquel producto que reúna esas tres características podrá calificarse como dinero electrónico, siendo los tres criterios: que el valor monetario almacenado por medios electrónicos represente un crédito contra el emisor; que se emita al recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago; y que sea aceptado (a efectos de pago) por un apersona física o jurídica distinta del emisor. [...] En efecto, las criptomonedas no responden al esquema monetario clásico al no representar un título de valor respaldado por un emisor, y no son emitidas al recibido de fondos». FERNÁNDEZ BERMEJO, D. «Blanqueo de Capitales y TIC: Marco Jurídico, Nacional y Europeo, Modus Operandi y Criptomonedas», 1ª ed., Aranzadi, España, 2019.

En este sentido también se pronuncia José Pedreira Menéndez, al afirmar que, «las divisas virtuales se definen como dinero electrónico no regulado, emitido y controlado por quienes lo crean y habitualmente usado y aceptado como unidad de pago para el intercambio de bienes y servicios dentro de una comunidad virtual específica. [...] El hecho de que se puedan llevar a cabo estas operaciones no las convierte en dinero electrónico, ya que no se cumplen las condiciones establecidas [...]. En las divisas virtuales los fondos no se expresan en la unidad de cuenta tradicional (euros en la Unión Europea), sino en una unidad de cuenta virtual, como puede ser, por ejemplo, el Bitcoin». PEDREIRA MENÉNDEZ, J. «Consideraciones sobre la tributación y la calificación contable de las operaciones con moneda digital (Bitcoins) en las empresas», en *Revista Quincenal Fiscal* [revista electrónica], n. 3, 2018 [consultado 28 de abril de 2019]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6287832>

En la misma postura muestra el despacho de abogados Uría Menéndez, «Las monedas virtuales tampoco deben confundirse con el dinero electrónico, que es un mecanismo de transferencia digital de moneda (definido en el art. 2.2 de la Directiva 2009/110/CE [...], como por ejemplo Paypal. Con el dinero electrónico, la relación entre dinero tradicional y electrónico tiene una base legal, y los fondos almacenados están expresados en la misma unidad monetaria (e.g., euro, dólar), mientras que esto no ocurre con las monedas virtuales». GIL SORIANO, A., «Monedas virtuales: aproximación jurídico-tributaria y control tributario», en *Actualidad jurídica Uría Menéndez* [revista electrónica], n. 48, 2018 [consultado 21 de mayo de 2019]. Disponible en:

https://www.uria.com/documentos/publicaciones/5803/documento/foro_esp_02.pdf?id=7879

A fortiori, el artículo 1.2 de la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico: es dinero electrónico «todo valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que represente un crédito sobre el emisor, que se emita al recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago según se definen en el artículo 2.5 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, y que sea aceptado por una persona física o jurídica distinta del emisor de dinero electrónico». En el caso de las criptomonedas no puede ser consideradas dinero electrónico porque no existe crédito contra el emisor.

Así, la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, indica que «Las monedas virtuales no deben confundirse con el dinero electrónico, tal como se define en el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), con el concepto más amplio de «fondos», tal como se define en el artículo 4, punto 25, de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), con el valor monetario almacenado en instrumentos exentos, tal como se especifica en el artículo 3, letras k) y l), de la Directiva (UE) 2015/2366, ni con las monedas de juegos, que solo pueden utilizarse en el contexto específico de un juego. Aunque las monedas virtuales pueden utilizarse frecuentemente como medio de pago, también podrían utilizarse con otros fines y encontrar aplicaciones más amplias, tales como medios de cambio, inversión, productos de reserva de valor o uso en los casinos en línea».

Una vez explicado de forma teórica por qué las criptomonedas no son dinero de curso legal¹⁷, resulta oportuno destacar los pronunciamientos del BCE, quien ha manifestado que: i) no tienen respaldo de una autoridad pública central que asegure su valor estable; ii) no existe una protección legal para los usuarios y; iii) se caracterizan por una gran volatilidad. Este cuarto apartado se encuentra muy relacionado con el primero, puesto que si no hay una autoridad que garantice su valor estable, las fluctuaciones en el precio son constantes y de importantes magnitudes, luego, su valor puede verse afectado de forma considerable en pocos minutos.

2.2 Comparativa: monedas tradicionales vs. criptomonedas

Prosiguiendo con el análisis de las criptomonedas, se expondrán las disimilitudes más significativas entre éstas y las monedas tradicionales, con el objeto de realizar una comparativa entre ambas que permita identificar los factores esenciales que han llevado a las autoridades e instituciones a afirmar que las criptomonedas no pueden ser consideradas dinero de curso legal ni, por consiguiente, dinero electrónico.

Para comenzar, las monedas tradicionales son medios físicos, esto es, son cuantificables, tangibles y medibles. Por el contrario, el formato de las criptomonedas es digital, lo cual implica que solo existen de forma virtual, no existiendo en soporte físico o material.

Por otra parte, las monedas tradicionales se encuentran vinculadas a un Estado concreto o grupo de Estados (v. gr.: Yen japonés o Euro, respectivamente). En cambio, las criptomonedas, como ya se ha indicado previamente, son descentralizadas, no están sometidas al control de ninguna autoridad o institución y, por tanto, no se vinculan a ningún Estado ni grupo de Estados.

Acorde con lo anterior, las monedas tradicionales son emitidas por los gobiernos o por la autoridad o institución que corresponda si es un grupo de Estados. Consecuentemente, su oferta es controlada por los bancos centrales, quienes tienen facultades para poder actuar sobre ellas, bien aumentando, bien reduciendo su cantidad en el mercado. En el caso de

¹⁷ De esta postura: NIETO GIMÉNEZ-MONTESINOS M.A. y HERNÁEZ MOLERA, J., «Monedas virtuales y locales: las paramonedas, ¿Nuevas formas de dinero?», en *Revista De Estabilidad Financiera*, [revista electrónica], n. 35, 2018 [consultado 12 de marzo de 2019]. Disponible en: https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/RevistaEstabilidadFinanciera/18/NOVIEMBRE/Monedas_virtuales_y_locales_las_paramonedas.pdf

las criptomonedas, al ser descentralizadas, son los mineros (creadores de criptomonedas) y la tecnología de minería quienes controlan la oferta, pudiendo entrañar graves riesgos, al tener potestad para influir en su valor.

Por último, las monedas tradicionales están muy influenciadas por las políticas monetarias que se realicen, especialmente, en lo que respecta a tasas de inflación y de interés. En cambio, en las criptomonedas, al no existir una autoridad que pueda elaborar políticas monetarias sobre ellas, este tipo de políticas no tienen repercusión sobre su valor.

2.3 Naturaleza jurídica: ¿Criptomonedas como medio de pago?

Tras haber definido el concepto de dinero y criptomoneda, trayendo a colación la nueva redacción propuesta por el BCE, es conveniente subrayar que el no ser consideradas dinero legal no impide que sean empleadas como medio de pago¹⁸.

De acuerdo con Puente González¹⁹, a día de hoy existen múltiples posturas doctrinales respecto a la naturaleza jurídica de las criptomonedas.

Un primera teoría, avalada por la SEC en EEUU, aboga por considerarlas instrumentos financieros o *securities*. Cabe adelantar que, de acuerdo con la normativa de EEUU cumple los requisitos para ello. Sin embargo, numerosos autores²⁰ opinan que no deben calificarse automáticamente como instrumentos financieros ya que no siempre cumplen dicha función. Por ejemplo, algunas de ellas simplemente intervienen en el mercado como medios de pago, en cuyo caso se califican como bienes muebles. En palabras de Muñoz Pérez, «cuando un bitcoin se utiliza como moneda de intercambio para la adquisición de un bien, un perfume, por ejemplo, [...] la figura no tiene trascendencia para el mercado de valores. Sin embargo, la compra de un número determinado de bitcoins [...] con la expectativa de especular [...], es un contrato de inversión»²¹.

¹⁸ Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión europea, de 22 de octubre de 2015, Asunto C-264/14 (Skatteverket / David Hedqvist), las criptomonedas son divisa digital y, con ello, medio de pago.

¹⁹ PUENTE GONZÁLEZ, I. A., «Criptomonedas: naturaleza jurídica y riesgos en la regulación de su comercialización», en *Revista de Derecho del Mercado de Valores* [revista electrónica], n. 22, 2018 [consultado 6 de junio de 2019]. Disponible en: <https://laleydigital.laley.es>

²⁰ Entre ellos: PUENTE GONZÁLEZ, I. A., «Criptomonedas: naturaleza jurídica y riesgos en la regulación de su comercialización», en *Revista de Derecho del Mercado de Valores* [revista electrónica], n. 22, 2018 [consultado 6 de junio de 2019]. Disponible en: <https://laleydigital.laley.es>

²¹ MUÑOZ PÉREZ, A. F., «Criptomonedas», el «dinero mágico». Aspectos jurídicos», en *Revista de Derecho del Mercado de Valores* [revista electrónica], n. 21, 2017 [consultado 6 de junio de 2019]. Disponible en: <https://laleydigital.laley.es>

En consecuencia, la segunda postura doctrinal es aquella que considera a las criptomonedas bienes muebles. En este sentido, guardan ciertas semejanzas con el dinero tradicional, un ejemplo de ello es su titularidad pseudónima. Ambos pueden cambiar de propietario sin que su titularidad quede registrada como sucede con determinados bienes muebles. Sin embargo, la diferencia principal es el carácter fungible del dinero (*ex. art. 337 CC*)²², ya que, como se ha mencionado anteriormente, las criptomonedas son totalmente identificables e irrepetibles²³. No obstante, determinados autores, las consideran fungibles debido a que en una transacción son intercambiadas unas por otras, defendiendo que tal intercambio no constituye una alteración objetiva de la prestación²⁴.

Por otro lado, al ser su naturaleza bien mueble, no puede negarse que integren el patrimonio de su titular, puesto que son susceptibles de propiedad privada y valoración económica (*ex. arts. 335 y 345 CC*). En consecuencia, es posible efectuar negocios jurídicos con criptomonedas (compraventa de criptomonedas con dinero de curso legal) y sobre ellas (intercambio o permuta de bienes con criptomonedas).

En nuestro país, el Código Civil en su artículo 1.170 dispone que: «El pago de la deuda de dinero deberá hacerse en la especie pactada y, no siendo posible entregar la especie, en la moneda de plata u oro que tenga curso legal en España». Por consiguiente, atendiendo al tenor literal del mencionado precepto, deudor y acreedor pueden acordar efectuar el pago mediante la entrega de criptomonedas. La controversia radica en la calificación de las criptomonedas bien como divisas, bien como bienes muebles. Los autores como Puente González que defienden esta posición, sostienen que en España, la moneda de curso legal es exclusivamente el euro²⁵, siendo divisas tradicionales el resto de las monedas (v. gr.: USD; JPY, etc.), calificación que no puede ser aplicada a las criptomonedas. Por ende, para parte de la doctrina, la calificación legal correcta es bien

²² Artículo 337 CC: «Los bienes muebles son fungibles o no fungibles. A la primera especie pertenecen aquellos de que no puede hacerse el uso adecuado a su naturaleza sin que se consuman; a la segunda especie corresponden los demás».

²³ De esta postura: LEGERÉN-MOLINA, A., «Retos jurídicos que plantea la tecnología de la cadena de bloques. Aspectos legales de *blockchain*», en *Revista de Derecho Civil*, vol. VI, núm. 1 (enero-marzo, 2019) [revista electrónica], vol. VI, núm. 1 (enero-marzo, 2019) [consultado 2 de abril de 2019]. Disponible en: <http://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/view/356/337>

²⁴ Fuente: GONZÁLEZ GRANADOS, J., «Retos del BitCoin y de la Blockchain», en VV AA, *Derecho digital: retos y cuestiones actuales*, Thomson Reuters Aranzadi [revista electrónica], 2018 [consultado 12 de marzo de 2019]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6426285>

²⁵ Artículo 3.1 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro: «desde el 1 de enero de 1999 inclusive, la moneda del sistema monetario nacional es el euro, tal y como esta moneda se define en el Reglamento (CE) 974/98, del Consejo de 3 de mayo». En el mismo sentido, art. 3.4 TUE, art. 119.2 TFUE y art. 2 Reglamento (CE) nº 974/98 del Consejo, de 3 de mayo de 1998, sobre la introducción del euro.

mueble²⁶, pese a que en el ámbito fiscal sean tratadas como divisas virtuales. Luego, si las partes pactan el pago de la deuda mediante la entrega de criptomonedas no será calificado como permuta a efectos fiscales, sino como operación efectuada en divisas.

Por último, parte de la doctrina, autoridades e instituciones, entre ellos el TJUE, consideran las criptomonedas como divisas virtuales o medio de pago. En 2015 el TJUE se pronunció acerca de la naturaleza de las criptomonedas en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Quinta, de 22 de octubre de 2015, Asunto C-264/14 (Skatteverket / David Hedqvist), la cual es estudiada en profundidad más adelante. Desde entonces, son más quienes apuestan por esta tercera teoría. En concreto, la DGT, tras el pronunciamiento del TJUE, debió modificar el criterio seguido hasta entonces con el fin de adaptar la interpretación española. Motivo por el cual, en España, a efectos fiscales, la operación consistente en el intercambio de unas criptomonedas por otras no constituye una permuta, sino que es calificada como una operación efectuada en divisas.

Son tres las ideas que deben extraerse de lo expuesto: i) las criptomonedas no forman parte del sistema monetario, puesto que no son monedas oficiales ni dinero electrónico, por tanto, tampoco dinero de curso legal, fundamentalmente por carecer de respaldo legal; ii) pese a ello, fiscalmente son consideradas divisas virtuales, funcionando en el mercado como medio de pago y; iii) en nuestro país existe un gran número de autores que las consideran bienes muebles de carácter digital, identificables, irrepetibles y susceptibles de valoración económica y propiedad privada.

2.4 Situación jurídica actual

Sin lugar a dudas la reciente tecnología *blockchain*²⁷ supone un reto para los juristas, autoridades, gobiernos e instituciones en su deseo de elaborar una regulación propia y

²⁶ De acuerdo con Puente González, «Una segunda postura doctrinal en relación con la naturaleza jurídica de las criptomonedas es su consideración como bien mueble digital. Desde esta perspectiva, las criptomonedas son productos electrónicos y, por tanto, intangibles, no distintos del material informático que se almacena en soporte digital. Tendrían así la consideración de bien mueble digital, no fungible y de propiedad privada (ex arts. 335, 337 y 345 del Código Civil). Esta postura goza del reconocimiento que le ha dado el Registro Mercantil al primer caso conocido de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada con bitcoins, válidamente inscrita en el Registro Mercantil» PUENTE GONZÁLEZ, I. A., «Criptomonedas: naturaleza jurídica y riesgos en la regulación de su comercialización», en *Revista de Derecho del Mercado de Valores* [revista electrónica], n. 22, 2018 [consultado 6 de junio de 2019]. Disponible en: <https://laleydigital.laley.es>

²⁷ «Registro descentralizado público y permanente de transacciones. En otras palabras, [...] es un libro de contabilidad público donde las entradas no se pueden modificar una vez que se han agregado».

específica para las criptomonedas, en particular, por la dificultad que supone subsumir en las categorías jurídicas existentes estas nuevas operaciones.

Atendiendo a sus características propias, aquellas que presentan una mayor problemática para una futura regulación son: la descentralización, impidiendo que cualquier autoridad o institución pueda ejercer control sobre ellas; y el anonimato, imposibilitando el conocimiento de los datos de los usuarios que han realizado la transacción u operación, favoreciendo la comisión de actividades ilícitas o fraudulentas.

Todo ello, añadido a su naturaleza virtual, origina una nueva realidad alejada de los criterios clásicos y tradicionales de mercado. Motivo por el cual, los gobiernos, autoridades e instituciones, nacionales e internacionales, se plantean si aplicar la normativa actual o, por el contrario, si urge una nueva legislación que aborde este fenómeno de forma específica. Por si todo ello no fuera suficiente, el avance y el desarrollo de la tecnología *blockchain* es imparable, siendo cada vez más rápido y creando nuevas aplicaciones sin precedente asimilable. La celeridad con la que se producen los cambios, se desarrollan nuevas tecnologías y se realizan nuevas actividades implica una complejidad añadida para la elaboración de una regulación a cualquier ámbito, puesto que, por muy eficiente que se sea en esta tarea, la realidad siempre irá por delante, dejando nuevas situaciones fuera del ordenamiento jurídico. Por ello, para autores como Muñoz Pérez²⁸, es necesario un profundo conocimiento del funcionamiento tecnológico para la correcta regulación de las criptomonedas, así como de los riesgos que pueden conllevar.

En síntesis, de acuerdo con Pastor Sempere²⁹, el principal reto jurídico al que Europa, España y, en general, el resto de Estados se enfrentan es dar una respuesta a estos escenarios, los cuales han supuesto una verdadera disrupción jurídica, bien mediante la elaboración de una futura regulación específica, bien mediante la adaptación del ordenamiento jurídico actual a estos nuevos fenómenos. Para ello, es necesario tener en

WHITE V., *Criptomonedas: comercio e inversión en Bitcoin, Litecoin y otras más* [libro electrónico], Babelcube Inc, España, 2019 [consultado el 16 de mayo de 2019]. Disponible en: <https://books.google.es/books?id=Zs6IDwAAQBAJ&lpg=PT23&dq=tecnologia%20blockchain%20definicion&hl=es&pg=PT23#v=onepage&q=tecnologia%20blockchain%20definicion&f=false>

²⁸ MUÑOZ PÉREZ, A. F., «Criptomonedas», el «dinero mágico». Aspectos jurídicos», en *Revista de Derecho del Mercado de Valores* [revista electrónica], n. 21, 2017 [consultado 6 de junio de 2019]. Disponible en: <https://laleydigital.laley.es>

²⁹ PASTOR SEMPERE, M. C., «Criptodivisas: ¿Una disrupción jurídica en la eurozona?», en *Revista de Estudios Europeos* [revista electrónica], nº 70, 2017 [consultado 16 de marzo de 2019]. Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0168_ES.html?redirect

consideración la complejidad tecnológica y la velocidad de las innovaciones. A este desafío se añade otro de envergadura mayor, la consecución de un consenso internacional acerca del tratamiento legal y régimen aplicable a las criptomonedas, el cual parece cada vez más lejano tras la falta de acuerdo en la última cumbre del G-20 celebrada en 2018.

III. LAS CRIPTOMONEDAS EN LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES

Dado el alcance y la dimensión que este nuevo fenómeno está suponiendo a nivel global, no se pueden obviar las respuestas que, a nivel internacional, han sido dadas respecto a la controversia legal existente en torno a las criptomonedas. En primer lugar, por la repercusión que tiene para España, se estudiará la normativa y pronunciamientos efectuados en Europa. En segundo lugar, se hará mención a determinados Estados que destacan por la posición adoptada al respecto.

El propósito no es otro que obtener una visión global del modo en que se está gestionando, en términos legales, esta nueva realidad en diversas partes del planeta, para, *a posteriori*, poder establecer una comparativa con el ordenamiento jurídico español.

1. EUROPA

Si bien es cierto que *ab initio* las autoridades europeas evitaron manifestarse con respecto a la regulación de las criptomonedas, así como del uso y actividades que se estaban desarrollando a partir de las mismas, tras el auge experimentado en los últimos años, particularmente en lo que respecta a blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y actividades especulativas y de inversión, ha sido necesario la fijación de ciertas directrices por parte de autoridades e instituciones europeas, tanto económicas como políticas.

Se comenzará analizando los pronunciamientos de las autoridades europeas. *A posteriori*, se estudiará en profundidad la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en concreto, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Quinta, de 22 de octubre de 2015, Asunto C-264/14 (Skatteverket / David Hedqvist), por ser la referencia fundamental de los Estados miembros en la regulación de criptomonedas en materia tributaria.

1.1 Pronunciamientos de las autoridades europeas ante la ausencia legislativa

Actualmente en la UE no se ha consensuado una regulación específica en la materia, desarrollando cada Estado su propio criterio. Así, se han adoptado tres posturas³⁰: i) a favor del empleo de las criptomonedas, apoyando su presencia mediante legislación favorable; ii) ausencia de legislación y pronunciamientos en la materia; y iii) preocupación por su empleo, materializada en la emisión de advertencias y comunicados alertando a los ciudadanos de los riesgos que conllevan.

Debido a la carencia de directrices europeas y la discrepancia entre los Estados miembros de la UE, es de especial trascendencia conocer los pronunciamientos de las autoridades e instituciones europeas³¹. De este modo, el Banco Central Europeo se pronunció en el Informe de 3 de mayo de 2016³² sobre el concepto de criptomonedas, afirmando que todavía no se habían definido fehacientemente. Anteriormente, en su informe de febrero de 2015 sobre monedas virtuales elaboró una aproximación, definiéndolas como «la representación digital de valor, no emitida por ninguna autoridad bancaria central, institución de crédito o emisor de dinero electrónico reconocido, que, en ciertas ocasiones, puede ser utilizada como medio de pago alternativo al dinero».

En el mismo sentido se ha pronunciado la Autoridad Bancaria Europea, quien considera las criptomonedas como un modo representación digital de un valor, la cual no se emite por una potestad pública ni por un banco central. A lo que añadió que, no mantienen relación alguna con las monedas fiduciarias. Pese a ello, son admitidas como medio de pago, pudiendo ser empleadas por personas físicas y jurídicas, así como ser transferidas y comercializadas a través de medios electrónicos.

Dados los riesgos que entraña la proliferación del uso de las criptomonedas sin existir una legislación específica que les sea aplicable e, incluso, un acuerdo sobre cómo aplicar y adaptar la normativa vigente, el objetivo del marco legislativo europeo actual de supervisión y control monetario busca evitar la utilización indebida de las criptomonedas

³⁰ Véase el epígrafe: 3.3 *Normativa tributaria: comparación entre Estados miembros de la Unión Europea*

³¹ Entre los cuales destacan los siguientes: i) la Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de mayo de 2016, sobre monedas virtuales (2016/2007(INI)); ii) el dictamen de Banco Central Europeo, de 12 de octubre de 2016, sobre una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica la Directiva 2009/101/CE; y iii) el informe de 9 de marzo de 2017 sobre la resolución legislativa propuesta por el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios.

³² Disponible en el siguiente enlace: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0168_ES.html?redirect

en materia de blanqueo de dinero o financiación de actividades ilegales, como el tráfico de drogas o el terrorismo. En sus inicios las criptomonedas eran empleadas para actividades fraudulentas al margen de la Administración Tributaria. Actualmente, debido al incremento de operaciones realizadas, se han asumido obligaciones en materia de control³³.

1.2 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Quinta, de 22 de octubre de 2015, Asunto C-264/14 (Skatteverket / David Hedqvist).

Se procede a estudiar de forma individualizada y pormenorizada la Sentencia de 22 de octubre de 2015, asunto C-264/14, al ser considerada el precedente principal en regulación de criptomonedas en materia fiscal³⁴, así como la resolución de referencia para las posteriores legislaciones y adaptaciones que se han elaborado desde entonces. En ella se determinan los conceptos y las bases para su control.

En lo que respecta a los antecedentes de hecho, cabe destacar lo siguiente: el Sr. David Hedqvist deseaba prestar, a través de una sociedad localizada en Suecia, servicios de intercambio de divisas tradicionales por divisas virtuales, Bitcoin. Las operaciones se iban a realizar de modo electrónico, mediante la web de la sociedad. Los bitcoins se adquirirían directamente de empresas, particulares y bolsas de intercambio internacional, para *a posteriori* venderlas a quienes realizasen pedidos a la sociedad.

Por otro lado, el TJUE se remite en numerosas ocasiones a jurisprudencia anterior, siendo reiteradas dos resoluciones, en las cuales fundamenta su decisión final. Por ello, resulta conveniente conocer los aspectos más relevantes de cada una de ellas.

En primer lugar, el Asunto *First National Bank of Chicago* (Sentencia de 14 de julio de 1998, C-172/96)³⁵. El TJUE debía resolver la controversia derivada del intercambio de

³³ Entre otras, la Agencia Tributaria Española envía requerimientos a las empresas que en nuestro país admiten el pago con bitcoins, debiendo justificar las cuantías recibidas. En estos últimos meses, además, ha enviado comunicados a quienes operan con criptomonedas con el objetivo de incluir tales operaciones en la declaración del IRPF de 2019.

³⁴ Determinados autores consideran que las conclusiones alcanzadas por el TJUE en esta resolución no son aplicables a todas las criptomonedas, sino tan solo a los bitcoins. De esta postura: FERNÁNDEZ BERMEJO, D. «Blanqueo de Capitales y TIC: Marco Jurídico, Nacional y Europeo, Modus Operandi y Criptomonedas», 1ª ed., Aranzadi, España, 2019.

³⁵ Disponible en el siguiente enlace:

<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d0f130def41d65a639a542c49e9998246dee4d98.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OaNyTe0?docid=44003&pageIndex=0&doclang=ES&mode=&dir=&occ=first&part=1&cid=116191>

monedas tradicionales a través de un banco. Así, determinó que el intercambio de divisas constituye una prestación de servicios, al ser las monedas medio legal de pago. A ello añade que, para que sea a título oneroso es necesaria una contraprestación, condición *sine qua non* para que se realice el hecho imponible y quede sujeta a IVA. Por tanto, afirma que existe una relación sinalagmática, la obligación de intercambio de una divisa por otra. Además, realiza una importante matización: no cobrar comisión o gasto no supone que no haya contraprestación, debido a que la remuneración se integra en el precio de venta. En segundo lugar, el Asunto *Velvet & Steel Immobilien* (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Tercera, de 19 de abril de 2007, Asunto C-455/05)³⁶, donde se establecen determinados criterios para la interpretación de la exención de las operaciones financieras. En particular, se analizan las exenciones contempladas en el art. 13 de la Sexta Directiva 77/388/CEE, precisando que la finalidad de dicho precepto es evitar divergencias en la aplicación del régimen del IVA en los Estados de la UE. En resumen, lo determinante para que una operación esté exenta es la naturaleza financiera de la operación, sin que para ello sea necesario que sean efectuadas por una entidad financiera. Por último, señala que todas las actividades comprendidas en los números 1 a 6 del art. 13, parte B, letra d), número 2 de la Sexta Directiva 77/388/CEE están comprendidas en el ámbito de las operaciones financieras.

Prosiguiendo con el estudio del Asunto *Hedqvist*, la primera cuestión prejudicial planteada al TJUE, pretendía precisar si procedía: i) la sujeción al IVA de las operaciones de intercambio de divisas tradicionales por divisas virtuales, y viceversa, realizadas a cambio de un pago y; ii) la calificación para las operaciones efectuadas de prestaciones de servicios realizadas a título oneroso en el territorio de un Estado miembro de la UE.

A este respecto, el TJUE concluye de manera semejante al Asunto *First National Bank of Chicago*, señalando que las divisas virtuales no pueden calificarse como bienes corporales en virtud del art. 14 de la Directiva del IVA, puesto que su única finalidad es funcionar como medio de pago. Luego, los intercambios de distintos medios de pago, no dan lugar a una entrega de bienes, debiendo ser calificadas como prestaciones de servicios, de acuerdo con el art. 24 de la Directiva del IVA.

³⁶ Disponible en el siguiente enlace:

<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30db326ad74f1f444084a583d84a0997a68e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMb3z0?docid=63505&pageIndex=0&doclang=ES&dir=&occ=first&part=1&cid=384593>

En cuanto al carácter oneroso de la prestación de servicios, el TJUE recuerda la jurisprudencia establecida. De modo que, solo se entenderá producida a título oneroso y, por tanto, en el sentido del art. 2, apartado 1, letra c) de la Directiva del IVA, cuando exista una relación directa entre el servicio prestado y la contraprestación recibida. Es decir, cuando entre las partes haya una relación jurídica de intercambio de prestaciones recíprocas y en la que la retribución percibida por quien efectúa la prestación es el contravalor efectivo del servicio prestado. Así, en el Asunto Hedqvist, el TJUE reafirma que la contrapartida es la diferencia entre el precio de compra y de venta del operador.

Por consiguiente, a tenor de lo expuesto, el TJUE declara que las operaciones consistentes en intercambio de divisas tradicionales por divisas virtuales, y viceversa, y realizadas a cambio del pago de un importe equivalente a la diferencia entre el precio de compra y de venta de estas por parte del operador, constituyen prestaciones de servicios realizadas a cambio de una contrapartida que presenta una relación directa con el servicio prestado, es decir, son calificables como prestaciones de servicios a título oneroso, en virtud del art. 2, apartado 1, letra c) de la Directiva del IVA.

En cuanto a la segunda cuestión prejudicial, una vez resuelta la sujeción al IVA, quedaba por determinar si las exenciones referidas a operaciones financieras contempladas en el art. 135, apartado 1, letras d) a f) de la Directiva del IVA son aplicables a las operaciones en cuestión y, consecuentemente, si estas quedan exentas de IVA.

En los apartados 36 y 37, el TJUE determina que las operaciones exentas de IVA en virtud de estas disposiciones son, por su naturaleza, operaciones financieras, sin ser necesario que sean realizadas por entidades financieras.

Para dar solución a esta cuestión, el TJUE se plantea si al caso concreto le es de aplicación la exención del art. 135, apartado 1, letra d), la cual hace referencia a servicios o instrumentos que implican una transferencia de dinero. Que las criptomonedas sean un medio de pago contractual, conlleva dos consecuencias: i) no se pueden considerar depósito de fondo, cuenta corriente, pago o giro; y ii) son un medio de pago directo, a diferencia de los créditos, cheques y otros efectos comerciales. Por ello, la exención de la letra d) no resulta de aplicación. Por otro lado, se analiza la exención del art. 135, apartado 1, letra e). A este respecto el TJUE declara que las divisas distintas a las monedas que no son medios legales de pago en uno o varios países, como ocurre con las criptomonedas, son operaciones financieras solo si han sido aceptadas por ambas partes como medio de pago alternativo y, además, su única finalidad sea servir como medio de pago. De modo que, esta exención sería aplicable tanto a los intercambios de divisas tradicionales como

de criptomonedas. Por último, se aborda la exención del art. 135, apartado 1, letra f). El Tribunal niega que puedan quedar recogidas bajo alguno de los dos supuestos, ya que no otorgan un derecho de propiedad sobre personas jurídicas. Por consiguiente, las operaciones objeto de consulta no están incluidas en el ámbito de aplicación de esta disposición. En resumen, el TJUE concluye que, al ser las criptomonedas un medio de pago contractual no es posible considerarlas cuenta corriente, depósito de fondos, giro o pago. Además, la diferencia esencial entre las divisas virtuales y los créditos, cheques y otros efectos comerciales, es que estos últimos son un medio de pago directo entre las partes que lo aceptan como tal. Por tanto, el TJUE estima que a estas operaciones sólo les es aplicable la exención del art. 135, apartado 1, letra e) de la Directiva del IVA.

Con el fin de simplificar el estudio de la Sentencia de 22 de octubre de 2015, asunto C-264/14, se sintetizan a continuación las ideas más relevantes: i) las operaciones indicadas se realizaban entre la sociedad del Sr. Hedqvist y quienes contrataban con ella. Se afirma la existencia de una relación jurídica sinalagmática, por la cual las partes se obligaban recíprocamente a intercambiar divisas tradicionales por virtuales, y viceversa. Por la prestación de los servicios, la sociedad recibía una contrapartida igual a la diferencia del precio de compra y venta de las divisas, la cual se integraba en el precio mediante los tipos de cambio; ii) una divisa virtual de flujo bidireccional, como el Bitcoin y otras criptomonedas, la cual es intercambiada por divisas tradicionales en operaciones de cambio, no puede considerarse un bien corporal, de acuerdo con el art. 14 de la Directiva del IVA, debido a que, su única y exclusiva finalidad es servir como medio de pago; iii) conforme a la jurisprudencia derivada del Asunto *First National Bank of Chicago*, la falta de comisión o pago de gasto es irrelevante para calificar a una prestación de servicios como onerosa. La trascendencia de dicha calificación radica en que las prestaciones de servicios a título oneroso en territorio de un Estado miembro por un sujeto pasivo están sujetas a IVA (*ex. art. 2.1 de la Directiva del IVA*). Las operaciones analizadas en el Asunto Hedqvist quedarían sujetas a dicho impuesto, puesto que, pese a no ser las criptomonedas legamente garantizadas, tienen la misma función que los medios de pagos legales. Por tanto, aplicando el principio de igualdad de trato, se puede afirmar que son prestaciones de servicios a cambio de una contraprestación que mantiene relación directa con el servicio prestado, esto es, son prestaciones de servicios a título oneroso, en el sentido de la citada disposición, luego, sujetas a IVA y; iv) En cuanto a las exenciones que podrían aplicarse, se debaten las tipificadas en el art. 135, apartado 1, letras d) a f),

de la Directiva del IVA. Tras un exhaustivo análisis se determina que, a las operaciones estudiadas solo les es de aplicación la letra e).

Para terminar, en la Sentencia de 22 de octubre de 2015, asunto C-264/14, se hace mención a la posible regulación equilibrada de las criptomonedas. En particular, el TJUE aboga por una «regulación inteligente con miras a fomentar la innovación y garantizar la integridad», logrando el equilibrio entre el estímulo de las oportunidades y el control de los riesgos. En resumen, se exige «un enfoque regulador proporcionado a escala de la Unión [...], pero considerando los desafíos que puede suponer en términos de regulación la generalización del uso de monedas virtuales». Así, señala tres aspectos técnico-regulatorios. De ellos, interesa el contexto normativo de la Unión Europea, puesto que, identifica las normas directamente aplicables a la tecnología de bloques (*blockchain*) y a las criptomonedas³⁷, pudiendo ser suficientes como margo regulador con independencia de la tecnología subyacente. Tras el pronunciamiento de TJUE en la Sentencia de 22 de octubre de 2015, asunto C-264/14, el Parlamento Europeo acoge las propuestas elaboradas por la Comisión Europea para incluir plataformas de intercambio de monedas virtuales en la Directiva contra el blanqueo de capitales³⁸ con la finalidad de suprimir el anonimato. De igual modo, merece especial atención la creación de un grupo operativo

³⁷ El TJUE en la Sentencia de 22 de octubre de 2015, asunto C-264/14, señala las siguientes normativas aplicables a las criptomonedas: i) Reglamento (UE) 648/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contraparte central y los registros de operaciones (EMIR); ii) Reglamento (UE) 909/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores; iii) Directiva (UE) 98/26/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores; iv) Directiva (UE) 2014/65/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros; v) Reglamento (UE) 600/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a mercados de instrumentos financieros; vi) Directiva (UE) 2014/91/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, que modifica la Directiva 2009/65/CE por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colecta en valores mobiliarios y; vii) Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y de Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos.

³⁸ Directiva (UE) 2018/843, de Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiera para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Disponible en: <https://www.boe.es/doue/2018/156/L00043-00074.pdf>. Se trata de la primera definición de carácter normativo a nivel europeo y nacional. Asimismo, de acuerdo con, FERNÁNDEZ BERMEJO, D. en «Blanqueo de Capitales y TIC: Marco Jurídico, Nacional y Europeo, Modus Operandi y Criptomonedas», es la «primera acción legislativa europea que afecta directamente a las criptomonedas [...] Si bien las disposiciones relativas al uso de criptomonedas son consecuencia directa del manato dirigido por el Parlamento Europeo a la comisión europea sobre la necesidad de emprender acciones regulatorias al respecto». Pese a ello, los cambios introducidos han sido de índole menor, entre ellos destaca la definición de monedas virtuales, incluida en el presente trabajo previamente. No obstante, como ya se ha mencionado, tras ello, el BCE elaboró una serie de observaciones. Así, el BCE ha negado expresamente el carácter de moneda a las criptomonedas, sin que esto sea impedimento para considerarlas medio de pago.

dirigido por la CE y formado por técnicos reguladores. Su fin último consistiría en aportar conocimientos técnicos y de regulación, analizar los riesgos y beneficios, así como apoyar una respuesta fundada a las nuevas oportunidades y desafíos.

1.3 Normativa tributaria: divergencias entre Estados miembros de la UE

Uno de los problemas fundamentales derivados de las criptomonedas es su volatilidad³⁹. Sus continuas oscilaciones de precio han originado un valor especulativo elevado que dificulta su tratamiento fiscal. Por otro lado, la falta de consenso sobre la determinación de su naturaleza, tanto a nivel nacional como internacional, ha implicado cambios de criterios y pronunciamientos confusos.

En el único aspecto en el que parecen estar de acuerdos la generalidad de los gobiernos es en negar a las criptomonedas la consideración de moneda de curso legal. En Europa, desde 2015 y tras el pronunciamiento del TJUE, las criptomonedas son consideradas medios de pago contractuales (divisas no tradicionales), lo que significa que, siempre que las partes así lo acepten, su utilidad será la misma que la del dinero de curso legal, sirviendo como medio de pago.

Asimismo, por no existir un consenso internacional sobre la naturaleza y tratamiento fiscal de las criptomonedas la regulación es muy diversa en los Estados miembros de la Unión Europea, puesto que, no se ha alcanzado un consenso generalizado.

En Estados como Alemania, Francia, Reino Unido y España las regulaciones no presentan grandes divergencias, debido a que, en ausencia de directrices europeas sobre cómo tratar los ingresos, pérdidas y beneficios obtenidos de las criptomonedas, decidieron secundar la decisión del TJUE de la Sentencia de 22 de octubre de 2015, asunto C-264/14.

Sin embargo, pese a ello, existen ciertas divergencias. Por ejemplo, en Alemania⁴⁰, a efectos fiscales, si las criptomonedas son utilizadas como modo de pago, se consideran equivalentes a la moneda de curso legal. Desde marzo de 2018, las criptomonedas no

³⁹ Así lo han expresado en numerosos comunicados el Banco de España y la Comisión Nacional de Mercados y Valores. En este sentido, destacar el Comunicado conjunto de la CNMV y del Banco de España sobre “criptomonedas” y “ofertas iniciales de criptomonedas” (ICOs).

⁴⁰ El Ministerio Federal de Finanzas de Alemania publicó en febrero de 2018 un documento en el que se especificaba el régimen fiscal para las operaciones relativas a criptomonedas. El citado comunicado en el que se basa lo expuesto en relación con Alemania pueden consultarse en castellano en el siguiente enlace: <http://www.lorenteylorente.es/2018/03/analisis-tributacion-bitcoin-en-alemania/>

están sujetas a IVA cuando se intercambian con divisas tradicionales. De modo que, solo las operaciones de compra y venta de servicios con criptomonedas quedan sujetas a IVA. Además, estimaron que tampoco deberán tributar los mineros, aquellos usuarios de la red que trabajan elaborando los bloques de la cadena *blockchain*, por la actividad realizada. No obstante, el comercio de criptomonedas por individuos sí está sujeto al impuesto de plusvalía, quedando exentos los beneficios inferiores a 600 euros y las ganancias de participaciones a largo plazo.

Otros Estados han tomado decisiones similares a las de Alemania. En Estonia las operaciones de criptomonedas tributan en concepto de ganancias de capital e IVA y, además, es necesario obtener una licencia para operar con ellas⁴¹. En Eslovenia⁴², se gravan los ingresos derivados de las operaciones con criptomonedas, tanto para personas físicas como jurídicas. Los porcentajes aplicables varían en función del ingreso anual obtenido, oscilando entre el 16% para ingresos inferiores a 8.000 euros al año y el 50% cuando sean superior a 70.000 euros al año. Lo que le distingue de Estonia es que no se gravan las ganancias de capital de inversores individuales al no ser estos beneficios parte de sus ingresos.

En consecuencia, se pueden establecer dos categorías dentro de la UE: i) Estados que han comenzado a regular, bien a favor o en contra del empleo de las operaciones de criptomonedas; ii) Estados que se mantienen a la espera de un régimen europeo de fiscalidad de criptomonedas.

Dentro de este segundo segmento se encontraría Bélgica⁴³, donde todavía no se ha realizado ningún pronunciamiento oficial al respecto. No obstante, hasta que esto ocurra, cualquier persona física que invierta en criptomonedas deberá tributar por un importe igual al 33% de la ganancia obtenida. Este hecho no es contradictorio con la ausencia de normativa de criptomonedas, puesto que, hasta que se elabore, los belgas deben tributar

⁴¹ El Tribunal Supremo de Estonia en 2016 determinó la sujeción a IVA. Posteriormente, la Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia publicó en su portal web oficial que las ciertas criptomonedas podrían considerarse valores. Web oficial: <https://www.fi.ee/en?id=21662>

⁴² Fuente: TRATNIK, K., «*Tax treatment of cryptocurrencies – what do you have to know*», [consultado 4 de junio de 2019]. Disponible en: <https://data.si/en/blog/tax-treatment-cryptocurrencies-slovenia/>

⁴³ En marzo de 2018, el diario *Brussels Times* en una publicación en la que se aseguraba que las autoridades fiscales belgas habían comenzado a buscar inversores en criptomonedas, incorporó un extracto de la normativa fiscal vigente al respecto en Bélgica: «cualquier persona que especule sobre el mercado de la criptomoneda debe pagar un impuesto del 33% sobre las ganancias obtenidas y declararlo en la sección ingresos varios en su declaración de impuestos».

por ellos como «otros ingresos». Bulgaria⁴⁴, al igual que Bélgica, también espera expectante una regulación a nivel europeo o, al menos, unas directrices comunes para los ordenamientos jurídicos estatales. Mientras tanto, los beneficios obtenidos por las compraventas de criptomonedas tributan en el impuesto sobre las ganancias de capital, aplicándoles un tipo de gravamen del 10%, empero, no existe todavía una posición clara sobre la tributación de los ingresos obtenidos y las compras de criptomonedas.

Asimismo, algunas de estas diferencias entre los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros de la UE, por pequeñas que sean, son aprovechadas por los individuos para evitar su tributación.

En Alemania se elaboró una ley reguladora de los activos intangibles que permite a los sujetos quedar exentos de tributación si conservan las criptomonedas por un periodo igual o superior a un año, para ello, se les exige que durante ese tiempo no se realicen operaciones de compraventa con ellas.

En Reino Unido⁴⁵, desde 2001, la regulación normativa declara exentas las ganancias y pérdidas obtenidas en juegos de azar y apuestas. Si bien parece que las criptomonedas no guardan relación alguna con esta materia, son muchos los que han optado por considerar que sus inversiones en criptomonedas son un juego de azar, por la volatilidad tan elevada que presentan, evitando así su tributación. Además, en 2014, se suprimió el IVA sobre las criptomonedas, por lo que, cualquier transacción con divisa virtual no queda sujeta a tributación. El motivo para tomar esta decisión se encuentra en su naturaleza, se consideró que no eran monedas legales, sino activos, razón por la cual algunos sectores exigen que sean gravados con el impuesto sobre la renta o el impuesto de ganancias de capital.

Por otro lado, ciertos Estados europeos, como Polonia⁴⁶, se muestran reticentes a la proliferación de las criptomonedas en la economía, llegando a elaborar normativa legal

⁴⁴ En este sentido se pronunció la Agencia Tributaria de Bulgaria (*Bulgarian National Revenue Agency*), declarando que el tipo impositivo aplicable sería del 10%, tal y como sucede con la venta de cualquier otro activo financiero. Web oficial: <https://nap.bg/en/>

⁴⁵ La Agencia Tributaria de Reino Unido, en particular, el Departamento de recaudación de ingresos públicos y aduanas, publicó en diciembre de 2018 un documento con las indicaciones pertinentes para las operaciones relativas a criptomonedas. El documento, denominado *Cryptoassets for Individuals*, puede consultarse en el siguiente enlace: <https://www.gov.uk/government/publications/tax-on-cryptoassets/cryptoassets-for-individuals>

⁴⁶ A finales de agosto de 2018 se publicó en la web oficial del Gobierno polaco el documento en el que se presentaba un nuevo proyecto de ley en materia de tributación de criptomonedas. Dicho documento es la fuente de la que se han obtenido los datos expuestos.

que restringe su uso y evita su empleo. Fue en agosto de 2018 cuando se publicó una nueva legislación tributaria que resolvía la problemática derivada de las operaciones con criptomonedas. El nuevo texto legal incluye grandes avances: i) se ofrece una definición clara, considerándolas «representación digital del dinero»; ii) se dividen en dos tipos, «criptomonedas y divisas digitales centralizadas», pudiendo ser empleadas como medio de intercambio y ser aceptadas como alternativas de pago; iii) las transacciones de criptomonedas quedarán exentas; iv) los ingresos obtenidos de la prestación de servicios, compraventa de bienes y cualquier otro acto comercial deberán tributar, ya que se consideran ingresos a efectos impositivos y; v) los mineros no tendrán obligación de tributar cuando realicen este trabajo de forma individual o en beneficio personal, empero si lo efectúan para entidades comerciales deberán atender a los parámetros establecidos en la nueva normativa fiscal. Actualmente, se aplica el 18% para ingresos que no superen los 85.500 *zloty* (aproximadamente 19.600 euros) y un 32% para cuantías mayores.

Ante la dificultad de regulación, los contrastes existentes entre ordenamientos jurídicos y la falta de directrices comunes por parte de la UE, determinados Estados mantienen una posición crítica con la ausencia de actuación de las instituciones europeas. Entre ellos, Holanda, a finales del pasado año, declaró que el actual marco normativo europeo era insuficiente, manifestando la naturaleza inherentemente transfronteriza de las criptomonedas y solicitando nuevas medidas jurídicas europeas para finales de 2019.

2. TRATO FISCAL EN TERCEROS ESTADOS

A día de hoy las criptomonedas son un factor económico relevante en el escenario mundial, moviendo millones de euros al año mediante transacciones online. Por ello y debido a su generalización, su uso para actividades cada vez más dispares y el aumento de usuarios que han entrado a operar en este nuevo mercado, los gobiernos, instituciones y organizaciones han aumentado su interés por ellas. Tanto es así que, en la última Cumbre del G-20, celebrada en marzo de 2018, se discutió acerca del modo de adecuación del nuevo sistema financiero descentralizado creado por las criptomonedas y la tecnología *blockchain* a la normativa actual. Específicamente, uno de los temas que más interés suscitó fue su regulación fiscal. Pese a la intención de los gobiernos de dar una solución jurídica a este complejo fenómeno tecnológico, la Cumbre finalizó sin éxito.

Como es evidente, el tratamiento normativo en los diferentes Estados no siempre es igual, habiendo desavenencias sustanciales entre unos y otros. En los extremos se distinguen

aquellos Estados que, hasta el momento, no han elaborado normativa al respecto y aquellos que se encuentran muy avanzados en comparación con los demás, por haber desarrollado una compleja regulación tributaria de las criptomonedas y gran parte de las operaciones que se pueden realizar con ellas. Por ende, la situación legal de las criptomonedas es muy diferente según el lugar donde nos encontremos. Así, en la mayoría de los Estados de Hispanoamérica, África y Oriente medio, las criptomonedas son generalmente desconocidas, por lo que, no disponen de regulación. En cambio, Estados Unidos, Canadá y Australia permiten su uso.

El objetivo de este apartado es comparar las divergencias normativas existentes en el ámbito internacional, más allá de las fronteras europeas.

Conforme a la investigación elaborada por *IG Group Limited*⁴⁷, se pueden discernir cuatro escenarios: i) Estados en los que se ha prohibido cualquier actividad o uso de criptomonedas. Entre ellos se encuentran Angola, Bolivia, Egipto, Irak, Marruecos, Nepal, Pakistán y Emiratos Árabes; ii) Estados con legislaciones que dificultan el acceso al mercado de criptomonedas. Algunos ejemplos son Colombia, República Dominicana, Indonesia, entre otros; iii) Estados con normativa contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Destacan Estonia, Gibraltar y Costa Rica; iv) Estados con normativa fiscal específica en materia de criptomonedas y contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Cabe hacer especial alusión a Japón y Australia.

2.1 Estados Unidos

De acuerdo con la legislación de EEUU, las criptomonedas deben tributar como propiedad intangible. De modo que, las regulaciones desarrolladas proponen contemplar su funcionamiento en el mercado como una *commodity*⁴⁸. Por tanto, en EEUU existe cierta normativa en materia fiscal. Actualmente cuenta con una *Uniform regulation of virtual currency businesses act*⁴⁹ firmada por la *National Conference of Commissioners*

⁴⁷ La investigación fue publicada en noviembre de 2018 en la página web oficial de *IG Group Limited* España. En particular, el artículo puede consultarse en el siguiente enlace: <https://www.ig.com/es/estrategias-de-trading/la-regulacion-de-criptomonedas-alrededor-del-mundo-181107>

⁴⁸ Bienes genéricos o productos empleados para uso comercial sin valor agregado o que no poseen ninguna característica diferenciadora y que se emplean como materia prima para otros bienes. Sus características principales son: a) dependen de factores externos; b) elevada volatilidad; c) retornos y rentabilidades altas.

⁴⁹ Disponible en: http://www.burr.com/wp-content/uploads/2018/01/Blog_Uniform-Regulation-of-Virtual-Currency-Businesses-Act-Offers-States-Regulatory-Framework-for-the-Virtual-Currency-Industry.pdf

on *Uniform State Laws*⁵⁰, el 19 de julio de 2017. Sus antecedentes fueron⁵¹: i) FinCEN⁵²; ii) NYDFS⁵³ y; iii) OCC⁵⁴.

Pese a ello, en EEUU existe un desorden de políticas debido a la desorganización de las autoridades federales respecto a cómo definir y regular las criptomonedas. Son muchos los expertos que han manifestado su disconformidad con la situación normativa en la que se encuentra EEUU, reclamando una solución única y conjunta. Según Goforth⁵⁵, el problema fundamental es la existencia de más de cuatro reguladores federales encargados del control de las criptomonedas y que califican su naturaleza de forma diferente: i) para la CFTC deben ser tratadas como mercancías; ii) la SEC las considera valores⁵⁶; iii) FinCEN les aplica la normativa de las divisas tradicionales y; iv) el Servicio de Impuestos Internos las considera propiedad.

⁵⁰ Promueve la autonomía del Estado al proporcionar un proceso para que los gobiernos estatales colaboren. Se busca lograr actos uniformes para todos los Estados. Web oficial: <http://www.uniformlaws.org/home>.

⁵¹ MUÑOZ PÉREZ, A. F., «Criptomonedas», el «dinero mágico». Aspectos jurídicos», en *Revista de Derecho del Mercado de Valores* [revista electrónica], n. 21, 2017 [consultado 6 de junio de 2019]. Disponible en: <https://laleydigital.laley.es>

⁵² Organismo encargado de elaborar una guía para la protección del sistema financiero mediante normas dirigidas a los usuarios y administradores, dejando al margen las operaciones de compraventas o transacciones entre usuarios. De acuerdo con Muñoz Pérez, «FinCEN ha sido el organismo encargado de dictar una guía en protección del sistema financiero [...] pero dejando al margen la utilización de la moneda cuando se efectúa entre usuarios para efectuar compras o transacciones». MUÑOZ PÉREZ, A. F., «Criptomonedas», el «dinero mágico». Aspectos jurídicos», en *Revista de Derecho del Mercado de Valores* [revista electrónica], n. 21, 2017 [consultado 6 de junio de 2019]. Disponible en: <https://laleydigital.laley.es>

⁵³ Ha colaborado en la creación de licencias y protección de inversores, evitando actuaciones delictivas. Muñoz Pérez afirma que: «Destacan también las iniciativas del [...] NYDFS, en el objetivo de crear licencias [...] proponiendo los objetivos de proteger a los inversores, evitar actuaciones delictivas y fomentar las inversiones de las firmas de capital riesgo». MUÑOZ PÉREZ, A. F., «Criptomonedas», el «dinero mágico». Aspectos jurídicos», en *Revista de Derecho del Mercado de Valores* [revista electrónica], n. 21, 2017 [consultado 6 de junio de 2019]. Disponible en: <https://laleydigital.laley.es>

⁵⁴ Agencia de supervisión y control. Continuando con los pronunciamientos de Muñoz Pérez, asegura que: «La agencia de supervisión OCC [...] efectúa labor de control, expresando el ámbito de la tutela en el documento «Supporting Responsible Innovation in the Federal Banking System: an OCC Perspective». MUÑOZ PÉREZ, A. F., «Criptomonedas», el «dinero mágico». Aspectos jurídicos», en *Revista de Derecho del Mercado de Valores* [revista electrónica], n. 21, 2017 [consultado 6 de junio de 2019]. Disponible en: <https://laleydigital.laley.es>

⁵⁵ GOFORTH, C., «US Law: Crypto is Money, Property, a Commodity, and a Security, all at the Same Time», en *Oxford Business Law Blog* [consultado 5 de mayo de 2018]. Disponible en: <https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2018/12/us-law-crypto-money-property-commodity-and-security-all-same-time>

⁵⁶ Siguiendo a Puente González: «Para llegar a esta conclusión, la SEC se basa en los criterios que, de acuerdo con la normativa estadounidense, deben seguirse para definir un contrato de inversión en instrumentos financieros: en primer lugar, la adquisición de un instrumento financiero; en segundo lugar, la existencia de una expectativa de ganancia; y, por último, la confianza en el esfuerzo de otros para procurar un rendimiento económico». PUENTE GONZÁLEZ, I. A., «Criptomonedas: naturaleza jurídica y riesgos en la regulación de su comercialización», en *Revista de Derecho del Mercado de Valores* [revista electrónica], n. 22, 2018 [consultado 6 de junio de 2019]. Disponible en: <https://laleydigital.laley.es>

Las ideas fundamentales de la normativa estadounidense en materia tributaria son: i) el intercambio de criptomonedas por cualquier otra divisa, tradicional o virtual, queda sujeto a tributación.; ii) la adquisición de bienes y servicios mediante criptomonedas ha sido definida como hecho imponible y, por ello, tributará a efectos del *sales tax*, equivalente al IVA; iii) aproximándose a la regulación alemana, si el usuario conserva las criptomonedas por un plazo superior a un año sin haber realizado ninguna operación con ellas, quedarán sujetas a tributación como ganancias de capital a largo plazo ; iv) respecto a los mineros, se considera actividad económica y se debe declarar y tributar como tal.

Por último, es de interés señalar que, el 6 de diciembre de 2018, última fecha en la que se han realizado pronunciamientos a favor de su regulación, se presentaron en el Congreso de EEUU la Ley de Protección al Consumidor de Moneda Virtual y la Ley de Competitividad Reguladora y del Mercado de Monedas Virtuales de EEUU. La primera tenía como fin último la prevención de la manipulación del valor de las divisas virtuales; la segunda, mejorar el sistema normativo en este aspecto.

2.2 Australia

Australia es una de las naciones en las que la legislación en materia de criptomonedas ha logrado un mayor desarrollo. Asimismo, a diferencia de lo que sucede en el resto de Estados analizados previamente, la postura del Gobierno australiano ha sido clara *ab initio*, mostrándose a favor de su empleabilidad por parte de los usuarios. Actualmente, solo Australia (julio de 2017) y Japón (marzo de 2016) han otorgado a las criptomonedas el estatus de moneda de curso legal.

Destaca por haber elaborado una normativa exhaustiva al respecto, a la cual se le dedica una sección propia en la plataforma web del Ministerio de Hacienda. En ella se describe todo tipo de detalle, desde el concepto o la naturaleza hasta cómo se debe tributar.

A nivel legislativo son numerosas las acciones que el Gobierno australiano ha llevado a cabo. Así, en abril de 2018, el Gobierno publicó diversas normas aplicables a los intercambios de criptomonedas, la más relevante fue la exigencia de registro de las permutas de divisas digitales y de presentación de informes en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Por otro lado, la regulación favorable de Australia tiene una triple finalidad: i) fortalecer la confianza de los ciudadanos; ii) proteger a los consumidores y agentes financieros y; iii) potenciar y apoyar el desarrollo tecnológico de la nación. En particular, en lo referente al ámbito tributario, en septiembre de 2017 se

eliminó la doble imposición sobre las monedas virtuales, poniendo fin a la sujeción al impuesto sobre bienes y servicios que recaía sobre la adquisición de criptomonedas. Además, se ha dotado a la Administración Tributaria de la potestad para rastrear e investigar a inversores y operaciones de criptomonedas con el fin de evitar el blanqueo de capitales. Respecto al empleo de criptomonedas se estableció que serían destinadas a uso personal siempre que las cantidades fueran menores a 10.000 dólares australianos (aproximadamente 6.000 euros), en cuyo caso, estarían exentas de impuestos. Si la cuantía fuese superior será considerada inversión, luego, si se obtuvieran beneficios superiores a 10.000 dólares australianos tributarían como ganancias patrimoniales, empero si se mantuviesen las criptomonedas durante un periodo mínimo de un año se aplicaría una reducción que podría alcanzar hasta el 50%. También tributarán como ganancias patrimoniales las compraventas de más de 10.000 dólares australianos. Por último, en cuanto a los mineros, su actividad profesional tributa como cualquier otra, debiendo realizar la correspondiente declaración en la que se detallen los ingresos obtenidos de dicha actividad y los costes en los que ha incurrido para la consecución del beneficio. Como sucedía en EEUU tributan en concepto de actividades económicas.

2.3 China

Es un Estado que no debe obviarse en este análisis ya que, no solo ha legislado, sino que, además, ha creado una jurisdicción propia con tribunales especializados.

Desde un primer momento, China ha formado parte de aquellos Estados que han mostrado una postura adversa a la proliferación de operaciones económicas y financieras con criptomonedas. Sin embargo, no ha supuesto un impedimento para ser consciente de la realidad. Por ello, se elaboró un programa consistente en un proyecto piloto a partir del cual se pretendió constituir juzgados especializados, denominados «Tribunal de Internet», para tratar la nueva realidad virtual que tantos problemas está ocasionando para los ordenamientos jurídicos. Debido al buen funcionamiento de este primer Tribunal, localizado en Hangzhou, y con la finalidad de dotar de mayor rapidez a la justicia China, progresivamente se han creado nuevas sedes, como la establecida en Pekín en septiembre de 2018 o la de Guangzhou en octubre del mismo año. Las materias que tratan estos Tribunales son aquellas relacionadas con las transacciones comerciales, los servicios online y, todo aquello relacionado con criptomonedas.

En cuanto a la calificación jurídica de las criptomonedas, son definidas como «mercancía virtual», por lo que no se puede considerar como una moneda y no debe circular en el mercado como tal. Se establecieron una lista de prohibiciones, entre las que destacan: i) los bancos y entidades de pago no pueden tratar con criptomonedas; ii) las instituciones financieras y de pagos no pueden proporcionar directa/indirectamente criptomonedas.

2.4 Tailandia

Tailandia fue el primer Estado del mundo en prohibir el uso de criptomonedas. Su gobierno denegó el permiso mediante un comunicado en su portal web oficial en el que se manifestaba la preocupación por la ausencia de control de las operaciones realizadas con criptomonedas, motivo por el cual se decidió su prohibición.

Otras naciones como Vietnam o Islandia también consideran ilegales las criptomonedas.

IV. ORDENAMIENTO JURÍDICO TRIBUTARIO ESPAÑOL

Una vez explicadas las respuestas de los Estados en el ámbito internacional, procede centrar el estudio en el ordenamiento español, estudiando tanto la tributación de las operaciones efectuadas con criptomonedas, como la tributación de criptomonedas.

En concreto, se analizará los siguientes tributos: i) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; ii) Impuesto sobre el Patrimonio; iii) Impuesto sobre actividades económicas; iv) Impuesto sobre Sociedades y; v) Impuesto sobre el Valor Añadido.

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Con el fin de obtener una visión general que permita encuadrar los pronunciamientos de la DGT en el marco regulatorio y previo al análisis del trato fiscal de cada uno de los impuestos enumerados, resulta preciso elaborar una breve descripción del contexto jurídico actual en nuestro país.

1.1 Situación jurídica: adecuación de la normativa tributaria vigente

Como ya se ha indicado, en España no existe una legislación propia reguladora de las criptomonedas. Pese a la ausencia de normativa, sí existen obligaciones tributarias para

las operaciones vinculadas con criptomonedas, las cuales serán objeto de estudio a lo largo de este epígrafe.

Como consecuencia, ante la falta de regulación específica se debe aplicar el régimen fiscal actual a este nuevo fenómeno, con las adaptaciones e interpretaciones pertinentes y las dificultades que de esta situación se derivan. Es por ello que, en numerosas ocasiones se traerá a colación consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos, las cuales ayudan a definir y conocer la correcta tributación de las criptomonedas. En consecuencia, para conocer el régimen fiscal del ordenamiento jurídico español aplicable se debe tener en consideración los pronunciamientos de la DGT.

Por último, para la calificación fiscal de las criptomonedas es trascendental delimitar su uso en la operación concreta que se vaya a analizar. En este sentido, recordando lo expuesto en el primer epígrafe del presente trabajo, en la UE las criptomonedas pueden ser empleadas tanto como medio de pago, como para fines de inversión o especulación, así como medio de retribución. Respecto al primero de ellos, tomando como fundamento el Asunto Hedqvist, en España son admitidas como medio de pago desde el año 2015.

1.2 Plan de Control Tributario (2018-2019)

El incremento del empleo de las criptomonedas en el tráfico económico con fines especulativos ha alertado a las instituciones españolas, especialmente, a la Agencia Tributaria, quien se ha propuesto ejercer una vigilancia más exhaustiva. Fue en el Plan de Control Tributario del pasado año 2018⁵⁷ donde por primera vez se realizó una mención expresa a este nuevo fenómeno. Según anunció la AEAT el objetivo no era otro que reforzar el control sobre las criptomonedas. Para su ejecución en 2018, Hacienda requirió información al respecto a más de 60 entidades: financieras, empresas que admiten pagos con criptomoneda e intermediarios, como casas de cambio.

A posteriori, el Plan elaborado para el ejercicio 2019⁵⁸ continúa con esta tendencia, ampliándose el ámbito de control sobre las mismas. Expresamente se afirma lo siguiente:

⁵⁷ Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2018. Disponible en el siguiente enlace: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-792

⁵⁸ Resolución de 11 de enero de 2019, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019. Disponible en el siguiente enlace: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-507>

«En relación con los riesgos fiscales observados en las operaciones realizadas con criptomonedas, durante el año 2019 [...] se realizará [...] las siguientes actuaciones:

- i) Análisis y explotación de la información obtenida en el año 2018 requerida a los intermediarios que intervienen en las operaciones realizadas con criptomonedas. Asimismo, se estudiará la posibilidad de realizar nuevos requerimientos para obtener información adicional;
- ii) Análisis y explotación de la información aportada por terceros sobre la tenencia y operaciones con monedas virtuales realizadas en España y en el extranjero por contribuyentes residentes en España [...];
- iii) Actuaciones de control con el objeto de garantizar la adecuada tributación derivada de la titularidad y transmisión de las monedas virtuales, así como del origen de los fondos utilizados en la adquisición de las mismas».

2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)

El primer tributo del ordenamiento jurídico español a analizar es, por su trascendencia práctica y por ser uno de los que más dificultades ha planteado hasta el momento, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

A lo largo de este apartado se examinarán tres operaciones: i) compraventa de criptomonedas con dinero de curso legal; ii) compraventa de criptomonedas con otras criptomonedas (intercambio o permuta); iii) retribución en criptomonedas (minado).

2.1 Compraventa de criptomonedas con dinero de curso legal

Las rentas derivadas de las operaciones de compraventa de criptomonedas tributarán en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas⁵⁹.

Es pertinente distinguir dos supuestos: i) la compraventa de criptomonedas puede realizarse en el ámbito de una actividad económica; ii) en caso contrario, tales operaciones darán lugar a ganancias o pérdidas patrimoniales. A continuación, se analizarán en profundidad cada uno de ellos.

⁵⁹ Las compraventas realizadas con criptomonedas, es decir, cuando se compre o venda un bien y la contraprestación sea en criptomonedas, en vez de en dinero legal, será estudiada más adelante en el Impuesto sobre el Valor Añadido, puesto que, no tiene trascendencia en lo que respecta al IRPF.

No obstante, antes de comenzar, conviene precisar que, en ambos casos, se emplean las criptomonedas como un activo especulativo, puesto que no se analiza el hecho de pagar la compra de un bien o la prestación de un servicio con criptomonedas en sustitución del dinero tradicional⁶⁰, sino aquellos supuestos en los que la compraventa de criptomonedas genera una renta para su adquirente, bien porque se dedique a ello profesionalmente, bien porque, de modo similar a lo que sucede con las acciones, el aumento o disminución de su valor genere una ganancia o pérdida a efectos del IRPF.

A) Actividad económica

Las rentas obtenidas de la compraventa de criptomonedas serán consideradas rendimientos de actividades económicas, integrando la Base Imponible General del IRPF⁶¹, cuando cumplan los requisitos fijados en el art. 27.1 LIRPF: i) procedan del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno de ellos; ii) ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos y; iii) finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

Por tanto, siempre que se cumplan las tres precisiones anteriores, las rentas obtenidas tributarán en el IRPF como rendimientos de actividades económicas, conformando la renta general del sujeto pasivo (*ex. art. 45 LIRPF*).

B) Ganancias o pérdidas patrimoniales

Según lo dispuesto en las Consultas Vinculantes de la DGT⁶², siempre que las rentas derivadas de la transmisión de criptomonedas no se obtengan en el desarrollo de una actividad económica, serán ganancias patrimoniales.

Se debe tener en cuenta que el tratamiento es similar a la compraventa de acciones en Bolsa, puesto que se genera un resultado que, a efectos impositivos, es considerado una variación patrimonial. De acuerdo con la Consulta Vinculante V0808-18, en función del valor de las criptomonedas, de las operaciones de compraventa se pueden derivar ganancias o pérdidas patrimoniales en el sentido del art. 33.1 LIRPF, al producirse una alteración en la composición y el valor del patrimonio del contribuyente.

⁶⁰ Esta operación será estudiada en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

⁶¹ De esta postura, DE MIGUEL, D. y RODRÍGUEZ, M., «Consideraciones tributarias generales sobre el bitcoin» en *CMS.law* [consultado 28 de abril de 2019]. Disponible en: <https://cms.law/es/ESP/>.

⁶² Consultas Vinculantes V1149-18, V808-18 y V0999-18.

Por otro lado, el importe por el que habrá de reconocerse la ganancia o pérdida, de acuerdo con el art. 34 LIRPF, será la diferencia entre los valores de transmisión y adquisición. En este momento es de interés realizar dos matizaciones: la primera en cuanto a la mera tenencia de criptomonedas, la cual no tributa en IRPF, por lo que solo quedarán sujetas a IRPF cuando sean convertidas a euros⁶³, excepto en el supuesto de intercambio de unas criptomonedas por otras; la segunda respecto a la valoración, ya sea en el momento de transmisión o adquisición, puesto que actualmente la Agencia Tributaria carece de medios e información para establecer un criterio único para la valoración.

En referencia a ello, de acuerdo con las últimas opiniones de expertos en tributación de criptomonedas⁶⁴, existe una gran dificultad de valoración que estos activos conlleva. Si bien es cierto que existen aplicaciones, similares a los monederos digitales, en las cuales se registran todas las operaciones y la información correspondiente (pago en euros, cotización de la criptomoneda, fechas, etc.), muy pocos usuarios las emplean. De este hecho se deriva la problemática adicional con la que cuenta la Administración Tributaria, puesto que la mayoría de sujetos no guardan ningún tipo de recibo o justificante. A lo que se añade que, un mismo sujeto a lo largo del año puede realizar cientos de transacciones. Como se puede evidenciar, las dificultades planteadas no afectan en exclusiva al IRPF, sino a todos los tributos, puesto que, a día de hoy, no se conoce de forma cierta cómo valorar las operaciones. La solución que aportada por los especialistas, siempre dejando claro su carácter eventual hasta que se aporte un criterio por Hacienda, es intentar buscar los valores de cotización y los movimientos reflejados en las cuentas bancarias o aplicaciones, con el fin de que si en el futuro se procediera a una inspección se pudieran justificar las declaraciones con criterios razonables, ante los cuales, *prima facie*, la Administración Tributaria no podría oponerse, debido a que a día de hoy no existen reglas de valoración al respecto.

⁶³ Siguiendo a los abogados Jaime Jaime Arenas, de Jaime Arenas Abogados y Jesús Lorente, de Seico Asesores, ambos expertos en tributación de criptomonedas: el valor en euros podría obtenerse de los movimientos reflejados en las cuentas bancarias, puesto que, en la mayoría de los casos, cuando se compran criptomonedas, por el valor de cotización fijado por el mercado, se pagan mediante una tarjeta u otro instrumento bancario. Lo mismo sucede con la venta de criptomonedas, donde generalmente los ingresos en euros son recibidos en una cuenta bancaria.

⁶⁴ De esta postura, los abogados Jaime Arenas y Jesús Lorente en el primer Coloquio sobre fiscalidad y criptomonedas celebrado en el pasado jueves 11 de abril de 2019 en la ciudad de Zaragoza.

De este modo, los especialistas en tributación de criptomonedas⁶⁵ coinciden en afirmar que, en la declaración que se debía presentar antes del 2 de julio de 2018, respecto a las operaciones de 2017, se tenían que incluir todas aquellas transacciones que se hubieran realizado. Para ello, se considera que al valor de adquisición y transmisión se incorporan los costes y comisiones. También se teoriza sobre las operaciones realizadas con anterioridad a 2017, concluyendo que, con el objeto de evitar posibles problemas en el futuro, las operaciones realizadas en ejercicios previos deberán tomarse en consideración en las declaraciones correspondientes mediante declaraciones complementarias. Por último, se enfatiza que «no es la solución preferible, ya que la gestión de estas criptomonedas como activos no ha sido metódica (en el sentido de tener registro en euros de todas las cotizaciones y operaciones, por ejemplo) además de que la agilidad de las transacciones, la desaparición de *exchanges*⁶⁶, etc., hacen que, efectivamente, la presentación de declaraciones y su cálculo vaya a resultar complicadísimo. Es decir, desde un punto de vista práctico y de la realidad de los contribuyentes no es la solución más adecuada. Sin embargo, desde un punto de vista de técnica jurídica, y a falta de otra definición legal al margen [...] de la propuesta de Directiva contra el blanqueo [...] lo cierto es que es coherente con el marco aplicable a la naturaleza jurídica de las criptomonedas»⁶⁷.

Por otro lado y continuando con la tributación a efectos del IRPF, cabría plantearse si la ganancia o pérdida patrimonial debe computarse en la Base Imponible General o del Ahorro, si, en este último caso, se consideran las criptomonedas como elementos patrimoniales (*ex. art. 46 b LIRPF*). En el primero de los supuestos los tipos de gravamen oscilarían entre el 9,5% y el 22,5% en función del beneficio obtenido (*ex. art. 63.1. 1º LIRPF*), mientras que en el segundo los tipos quedarían comprendidos entre el 9,5% y el 11,5% (*ex. art. 66.1. 1º LIRPF*). Todo ello, siempre que los contribuyentes tengan su residencia habitual en España.

⁶⁵ En el mismo sentido se ha pronunciado en su blog profesional David Maeztu, abogado especializado en tecnología y fiscalidad de criptomonedas. MAEZTU, D., «Tributación en IRPF (impuesto de la renta) de los cambios entre criptomonedas», en *451.legal.com* [consultado 28 de abril de 2019]. Disponible en: <https://451legal.com/tributacion-renta-cambios-criptomonedas/>

⁶⁶ Plataformas virtuales o aplicaciones en las que se intercambian, compran y venden criptomonedas.

⁶⁷ MAEZTU, D., «Tributación en IRPF (impuesto de la renta) de los cambios entre criptomonedas», en *451.legal.com* [consultado 28 de abril de 2019]. Disponible en: <https://451legal.com/tributacion-renta-cambios-criptomonedas/>

Para el caso objeto de estudio, inversiones que hayan producido ganancias, éstas se incorporan en la Base Imponible del Ahorro (*ex. art. 46 b LIRPF*)⁶⁸. Por consiguiente, siempre que el contribuyente tenga su residencia habitual en España, se aplicarán los tipos de gravamen del ahorro del art. 66.1. 1º LIRPF.

Respecto a la imputación temporal en la Consulta Vinculante V0808-18, la DGT considera que, de acuerdo con lo establecido en el art. 14 letra c) LIRPF, las ganancias y pérdidas patrimoniales se imputarán en el periodo impositivo en el que se haya producido la alteración patrimonial. Al derivarse esta alteración de un contrato de compraventa, se producirá en el momento de la entrega de las criptomonedas (*ex. art. 609 CC*⁶⁹), con independencia del momento en el que se perciba el precio de venta. Así, hace mención a la jurisprudencia asentada por el Tribunal Supremo respecto a la teoría del título y el modo, según la cual lo relevante para la transmisión del dominio no es el pago del precio, sino la tradición. En consecuencia, la ganancia o pérdida patrimonial se imputará en el periodo impositivo en el que se haya realizado la entrega de las criptomonedas, sin perjuicio de las operaciones a plazos o con precio aplazadas, a las que les es de aplicación la regla especial de imputación temporal del artículo 14.2.c) LIRPF⁷⁰.

En relación a ello, puede resultar controvertida la falta de entrega en el plazo acordado de las criptomonedas debidas, bien por ser víctima de una estafa, por problemas técnicos durante la transacción, por cierre de la plataforma de intercambio, o cualquier otro motivo. Independientemente de la causa, solo tendrá la consideración de pérdida patrimonial a efectos de IRPF cuando concurra alguna de las circunstancias enumeradas en el art. 14.2 k) LIRPF⁷¹. Si *a posteriori* se entregaran las criptomonedas debidas deberá tratarse como ganancial patrimonial.

⁶⁸Consulta Vinculante V0999-18: «Las ganancias o pérdidas patrimoniales procedentes de las operaciones de permuta entre monedas virtuales diferentes, así como el importe de las ganancias o pérdidas patrimoniales que se pongan de manifiesto en las transmisiones de las monedas virtuales a cambio de dinero, constituyen renta del ahorro conforme a lo previsto en el artículo 46. b) de la LIRPF y se integran y compensan en la base imponible del ahorro en la forma».

⁶⁹ Artículo 609 CC: «La propiedad se adquiere por la ocupación. La propiedad y los demás derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten por la ley, por donación, por sucesión testada e intestada, y por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición. Pueden también adquirirse por medio de la prescripción».

⁷⁰ Artículo 14 LIRPF. Imputación temporal: «2. Reglas especiales, c) Las ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas se imputarán al período impositivo en que tenga lugar su cobro, sin perjuicio de las opciones previstas en las letras g), i) y j) de este apartado».

⁷¹ Artículo 14 LIRPF. Imputación temporal: «2. Reglas especiales, k) Las pérdidas patrimoniales derivadas de créditos vencidos y no cobrados podrán imputarse al período impositivo en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

Así, de acuerdo con la Consulta Vinculante V2466-08, en un primer momento era ganancia patrimonial la obtenida en la diferencia de cambio. De modo que, cuando se relaciona con divisas, el momento de tributación era el del cambio efectivo a euros (*ex. art. 14.1.c y 14.2.e LIRPF*). Sin embargo, este criterio generaba situaciones injustas, por lo que en la Consulta Vinculante V0808-18, se indicó que: «la alteración patrimonial habrá de entenderse producida en el momento en que se proceda a la entrega de las monedas virtuales por el contribuyente en virtud del contrato de compraventa, con independencia del momento en que se perciba el precio de la venta, debiendo, por tanto, imputarse las ganancia o pérdida patrimonial producida al período impositivo en que se haya realizado dicha entrega». El problema que presenta, como ya se ha explicado con anterioridad, es la dificultad para obtener la información y documentación necesaria para acreditar las pérdidas y ganancias por parte del usuario.

En lo que afecta a la compensación, la Consulta Vinculante V0999-18 determina que, en el supuesto de que el contribuyente hubiera obtenido una pérdida patrimonial podrá compensarla en el ejercicio correspondiente con otras ganancias patrimoniales que hubiera obtenido. En caso de que no hubiera ninguna, podrá compensarla en los 4 años siguientes (*ex. art. 49 LIRPF*).

En cuanto a los robos de criptomonedas, en la Consulta Vinculante V1979-15, la DGT determina que debe considerarse una pérdida patrimonial que formará parte de la Base Imponible General. Su imputación solo podrá realizarse cuando la misma devenga judicialmente incobrable, o, en su caso, se produzca una quita en un concurso de acreedores o haya pasado un año desde la reclamación judicial.

1.º Que adquiera eficacia una quita establecida en un acuerdo de refinanciación judicialmente homologable a los que se refiere el artículo 71 bis y la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, o en un acuerdo extrajudicial de pagos a los cuales se refiere el Título X de la misma Ley.

2.º Que, encontrándose el deudor en situación de concurso, adquiera eficacia el convenio en el que se acuerde una quita en el importe del crédito conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en cuyo caso la pérdida se computará por la cuantía de la quita. En otro caso, que concluya el procedimiento concursal sin que se hubiera satisfecho el crédito salvo cuando se acuerde la conclusión del concurso por las causas a las que se refieren los apartados 1.º, 4.º y 5.º del artículo 176 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

3.º Que se cumpla el plazo de un año desde el inicio del procedimiento judicial distinto de los de concurso que tenga por objeto la ejecución del crédito sin que este haya sido satisfecho.

Cuando el crédito fuera cobrado con posterioridad al cómputo de la pérdida patrimonial a que se refiere esta letra k), se imputará una ganancia patrimonial por el importe cobrado en el período impositivo en que se produzca dicho cobro».

Por último, la compraventa sucesiva de criptomonedas a lo largo del ejercicio se computa empleando el principio contable FIFO «*First In First Out*», es decir, las primeras adquiridas serán las primeras declaradas en el momento de la venta.

2.2 Compraventa de criptomonedas con criptomonedas (permuta)

La diferencia con el epígrafe anterior radica en que, si bien en primer lugar se ha estudiado la tributación a efectos de IRPF de la compra y venta de criptomonedas cuando la contraprestación es dinero de curso legal (v. gr: se compran 5 bitcoins por 10 euros), en este epígrafe se analizará la tributación en el supuesto de que la contraprestación de la compra o la venta sean otras criptomonedas, (v.gr.: se compran 5 bitcoins por 10 ripples).

Actualmente, ni la doctrina ni la DGT se han pronunciado en lo que respecta a la compraventa con criptomonedas cuando se realiza como actividad económica. Sin embargo, sí lo han hecho respecto a las ganancias o pérdidas patrimoniales.

Pueden suscitarse dudas respecto a cómo pueden generarse ganancias o pérdidas en los intercambios de criptomonedas. Por ello, se expondrá el siguiente ejemplo: i) un sujeto compra 1 bitcoin por 2.000 euros; ii) cuando el valor del bitcoin alcanza los 3.000 euros, el sujeto intercambia el bitcoin por 10 ethereums, cuyo valor es el de 1 bitcoin (3.000 euros) y; iii) como resultado de esta operación, el sujeto tiene una ganancia patrimonial de 1.000 euros, diferencia entre el valor de adquisición del bitcoin y su valor en el momento de la permuta.

En otras palabras, el sujeto a fecha 1 (compra) dispone del valor de adquisición de ese bitcoin (2.000 euros), a fecha 2 (intercambio) dispone del valor de cambio (3.000 euros), el cual es empleado como valor de transmisión del bitcoin y valor de adquisición de los 10 ethereums, de tal modo que: i) la ganancia patrimonial del bitcoin será de 1.000 euros y; ii) cuando intercambie los 10 ethereums calculará su ganancia o pérdida patrimonial considerando como valor de adquisición 3.000 euros y fecha de adquisición la fecha 2.

Continuando con el ejemplo, esos 1.000 euros no se han ganado como tal, debido a que no se han transformado a dinero de curso legal. Sin embargo, deberán declararse a efectos de IRPF. El motivo es el que se explica a continuación.

Atendiendo a lo expuesto por la DGT en las Consultas Vinculantes V1149-18, V808-18 y V0999-18, el intercambio de criptomonedas constituye una permuta (*ex. art.* 1.538

CC⁷²), dando lugar a una alteración en la composición y valor del patrimonio. Por tanto, en este caso, pese a tratarse de una permuta de criptomonedas, si se encuentra al margen de una actividad económica⁷³, se trata de una renta calificada como ganancia o pérdida patrimonial conforme al citado art. 33.1 LIRPF.

En concreto, la Consulta Vinculante V0999-18, determina que las permutas entre criptomonedas también están sujetas a tributación a efectos del IRPF: «el intercambio entre monedas virtuales diferentes realizado por el contribuyente al margen de una actividad económica da lugar a la obtención de renta que se califica como ganancia o pérdida patrimonial conforme al citado artículo 33.1».

2.3 Criptomonedas como retribución: minado

De acuerdo con la Consulta Vinculante V3625-16, las operaciones de minado consisten en la creación de nuevos bloques y criptomonedas. Como «recompensa» quienes realizan esta actividad, reciben una determinada cantidad de la criptomoneda que se haya minado.

En terminología de *blockchain*, los mineros son los usuarios de la red que se dedican a estas tareas y que debido a la complejidad que entrañan existen, actualmente, auténticos expertos de minado que se dedican profesionalmente a ello. Por consiguiente, estos ingresos son recibidos como retribución por su actividad de minado y, consecuentemente, cuando el contribuyente se dedica a ello de forma habitual desarrollando una actividad económica, deberá tributar por los beneficios obtenidos bajo la tarifa general del IRPF. No obstante, podrá minorar los ingresos con los gastos necesarios en los que haya incurrido para el desarrollo de su actividad (electricidad, amortización del hardware informático, amortización de los equipos, etc.).

⁷² Artículo 1538 CC: «La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra».

⁷³ Recuérdese que, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en el art. 27 LIRPF, las rentas obtenidas tributarán en el IRPF como rendimientos de actividades económicas.

3. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO (IP): TENENCIA DE CRIPTOMONEDAS

En el epígrafe *Criptomonedas como medio de pago* se ha concluido que estas pueden ser definidas como bienes muebles de carácter digital susceptibles de propiedad privada y valoración económica. Por tanto, al ser consideradas un bien mueble, integran el patrimonio de su titular (*ex. arts. 335 y 345 CC*), debiendo ser incluidas en la Base Imponible del tributo objeto de estudio.

En la Consulta Vinculante V0590-18 la DGT ha manifestado la existencia de la obligación de declarar la tenencia de criptomonedas, debiéndose valorar por su valor de mercado en la fecha de devengo, esto es, a 31 de diciembre (*ex. arts. 24 y 29 LIP*). De nuevo nos encontramos ante el problema de valoración, por lo que hasta que la Agencia Tributaria ofrezca un criterio único, la solución más razonable parece ser la propuesta por los expertos en tributación de criptomonedas: emplear cualquiera de los valores de cotización del día 31 de diciembre. La controversia que se plantea al respecto, se debe a la alta volatilidad de las criptomonedas, ya que su valor puede experimentar oscilaciones de miles de euros en unas horas. Por ello, si el contribuyente puede declarar cualquier valor del día 31 para la valoración, puede emplear a su favor estas oscilaciones con fines fraudulentos. No obstante, habrá que esperar a que la DGT se pronuncie al respecto y ofrezca una solución única en la que se de respuesta a todos los problemas planteados.

Continuando con la consulta mencionada, se establece que el hecho imponible está constituido por la titularidad del sujeto pasivo en el momento de devengo de un conjunto de bienes y derechos de contenido económico, en este caso las criptomonedas (*ex. art. 3 LIP en relación con art. 1 LIP*). Asimismo, el sujeto pasivo será el titular de dichos bienes y derechos a fecha de devengo, luego, el tenedor de las criptomonedas a 31 de diciembre. En relación con lo anterior, como ya se ha indicado previamente, el aspecto más controvertido que puede resultar es el valor por el cual van a integrar la Base Imponible. Podrían suscitarse dudas en cuanto a si, por su similitud con las acciones, podrían valorarse de acuerdo con los criterios establecidos en los art. 13 y ss. LIP para acciones y títulos cotizados en mercados oficiales. No obstante, la DGT, en las Consultas Vinculantes V0590-2018 y V0250-18, reitera que deberán valorarse por su valor de mercado a 31 de diciembre (*ex. art. 24 LIP*).

La Consulta Vinculante V0250-18 va un paso más allá y añade que: «el hecho imponible del impuesto está constituido para el sujeto pasivo y en el momento del devengo, de la titularidad del conjunto de bienes y derechos de contenido económico que le sean atribuibles, con deducción de cargas y gravámenes que disminuyan su valor y de la deudas y obligaciones personales de las que deba responder».

Es importante señalar que se trata de un impuesto cuyo rendimiento se encuentra cedido en su totalidad a las CCAA (*ex. arts. 25.1 b), 26.1 A a) y 31 Ley 22/2009*, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributaria). Por tanto, se cede a la Comunidad Autónoma el rendimiento total producido en su territorio, entendiéndose por ello el rendimiento que corresponda a aquellos sujetos pasivos con residencia habitual en dicho territorio (*ex. art. 31 Ley 22/ 2009*). De modo que, cada Comunidad Autónoma puede asumir competencias normativas sobre diferentes elementos de cuantificación, como el tipo de gravamen o el mínimo exento (*ex. art. 47 Ley 22/2009*)⁷⁴.

Para terminar, cabe hacer alusión a la controversia existente en torno a la obligación de incluir las criptomonedas en la declaración de bienes y derechos en el extranjero cuando el valor de las criptomonedas sea superior a 50.000 euros (modelo 720). Hasta el momento, la DGT no se ha pronunciado al respecto, por lo que existen dudas sobre si los monederos virtuales se deben incluir en el mencionado modelo. Resulta conveniente señalar que, el modelo 720 hace referencia a tres obligaciones: i) obligación de informar sobre cuentas o entidades financieras situadas en el extranjero (*ex. art. 42 bis RD 1065/2007*); ii) obligación de información sobre valores, derechos, seguros y rentas depositadas, gestionadas u obtenidas en el extranjero (*ex. art. 42 ter RD 1065/2007*); iii) obligación de información sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero (*ex. art. 54 bis RD 1065/2007*). Solo en caso de que las criptomonedas se encuentren en monederos virtuales localizados en el extranjero, se entenderá que las primeras también lo están y, por tanto, se debería estudiar si el supuesto

⁷⁴ Art. 47.1 Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. Alcance de las competencias normativas en el Impuesto sobre el Patrimonio: «En el Impuesto sobre el Patrimonio, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias normativas sobre: a) Mínimo exento; b) Tipo de gravamen; c) Deducciones y bonificaciones de la cuota».

puede encajar en alguno de los supuestos enumerados. Para parte de la doctrina⁷⁵, no sería posible la subsunción en los arts. 42 bis, 42 ter y 54 del Real Decreto 1065/2007, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Por tanto, no existiría obligación de presentar el modelo 720.

4. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE): MINADO, TRANSMISIÓN O INTERMEDIACIÓN DE COMPRAVENTA E INTERCAMBIOS DE CRIPTOMONEDAS

El Impuesto sobre Actividades Económicas, se encuentra regulado en los art. 78 a 91 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en adelante TRLRHL.

La DGT en las Consultas Vinculantes V1028-15 y V2908-17 ha manifestado que en los casos en los que se produzca el hecho imponible del IAE resultará de aplicación la regla de cierre 8ª de la Instrucción para la aplicación de las Tarifas, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre⁷⁶.

De acuerdo con el art. 78.1 TRLRHL, el hecho imponible es el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto, cuando en dicho ejercicio se ordenen por cuenta propia medios de producción y recursos humanos, o uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. A tenor de lo expuesto, las personas físicas y jurídicas que profesionalmente se dediquen al minado, transmisión o intermediación de criptomonedas tendrán la obligación de tributar por este impuesto.

⁷⁵ Entre otros autores, LEGERÉN-MOLINA, A., «Retos jurídicos que plantea la tecnología de la cadena de bloques. Aspectos legales de *blockchain*», en *Revista de Derecho Civil*, vol. VI, núm. 1 (enero-marzo, 2019), [revista electrónica], vol. VI, núm. 1 (enero-marzo, 2019) [consultado 2 de abril de 2019]. Disponible en: <http://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/view/356/337> y DE LA CUEVA GONZÁLEZ-COTERA, A. y GÓMEZ BARRERO, C. «La tributación del bitcoin y las criptomonedas en las personas físicas» en *El Derecho* [consultado 5 de abril de 2019]. Disponible en: www.elderecho.com.

⁷⁶ Regla de cierre 8ª de la Instrucción para la aplicación de las Tarifas: «Si la clasificación prevista en el párrafo anterior no fuera posible, las actividades no especificadas en las Tarifas se clasificarán, provisionalmente, en el grupo o epígrafe correspondiente a la actividad a la que por su naturaleza más se asemejen y tributarán por la cuota asignada a ésta».

El problema que podría presentar el IAE es que, debido a la ausencia de normativa específica, estas actividades no cuentan con un grupo o epígrafe en el que ser enmarcadas. No obstante, la DGT se ha pronunciado al respecto. En la Consulta Vinculante V1028-15 la DGT determinó que la compraventa de criptomonedas en cajeros o máquinas de *vending* se debe clasificar como «Otras máquinas automáticas» (epígrafe 969.7 de la sección primera del RDL 1175/1990). En cambio, de acuerdo con la Consulta Vinculante V3625-16, si la actividad se ejerce mediante una plataforma web propia o aplicaciones informáticas (apps) se clasificaría como «Otros servicios financieros no clasificados en otras partes -n.c.o.p.-» (epígrafe 831.9 de la sección primera del RDL 1175/1990)⁷⁷.

En lo referente a las operaciones de intercambio (*trading*), si se realizan sobre el patrimonio propio simplemente sería la gestión de los fondos propios, puesto que no se cumplen los requisitos necesarios para considerarse actividad económica. En cambio, si se gestionan carteras de activos de terceros sí quedaría bajo la amplia definición aportada por la DGT en la mencionada consulta.

Por otro lado, en la misma consulta V3625-16 la DGT aclara la tributación por parte de los mineros. «[...] basta con un solo acto de realización de una actividad económica para que se produzca el supuesto de hecho gravado por el impuesto, lo que, en definitiva, viene a excluir la habitualidad en el ejercicio de la actividad como requisito indispensable». Asimismo, esta obligación tributaria se extiende al resto de actividades profesionales que se puedan realizar con las criptomonedas, puesto que, como se recuerda en la consulta, las actividades empresariales o profesionales son «las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios». Por consiguiente, quedarían incluidas todas aquellas actividades profesionales, no solo el minado, sino también la intermediación o cualquier otra operación.

Por último, es importante indicar la exención del art. 81 TRLRHL, según la cual quedan exentas las personas físicas, los sujetos pasivos del IS, las sociedades civiles y las entidades del art. 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con un importe neto de la cifra de negocios inferior a un millón de euros.

⁷⁷ En el mismo sentido se pronuncia la Consulta Vinculante V6837-17, en la que se estudió la actividad consistente en la intermediación en la compraventa de criptomonedas mediante una plataforma web propia.

5. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS): COMPRAVENTA DE CRIPTOMONEDAS Y MINADO

Hasta el momento solo se ha planteado una única consulta al respecto, por lo que se debe de atender a este pronunciamiento para conocer la tributación de las empresas denominadas *exchangers*⁷⁸. No obstante, la doctrina defiende que, al ser personas jurídicas, siempre que dispongan de su residencia en territorio español, son contribuyentes a efectos del Impuesto de Sociedades (*ex. art. 7.1 a) Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, en adelante, LIS*). Por ello, las rentas obtenidas como consecuencia del desarrollo de tal actividad quedan bajo el ámbito de aplicación del mencionado texto normativo.

Atendiendo a lo dispuesto por la doctrina⁷⁹, formarán parte de la base imponible los ingresos derivados de las operaciones de compraventa y minado de criptomonedas, devengados en cada periodo impositivo.

Una vez conocida la posición de la doctrina, se analizará el criterio ofrecido por la DGT en la Consulta Vinculante V-2228-13, en la que se plantea la forma de tributación en el IS de una empresa, residente en España, que realiza la actividad de *exchanger*. En la mencionada consulta se indica que «en la realización de operaciones de venta y compra de moneda virtual a clientes particulares, a cambio de percibir o entregar un importe en dinero de curso legal, el cambista deducirá una comisión cifrada en un porcentaje sobre la cuantía de la operación, la cual constituye su beneficio por prestar dicho servicio, dado que el particular lo que efectúa es una operación de compra (o en su caso de venta) de un medio de pago (la moneda virtual), no emitido por el vendedor, que puede consumir mediante su utilización en la adquisición de bienes o servicios». De modo que, de acuerdo con la DGT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades formarán parte de la base imponible los ingresos devengados en cada periodo impositivo, siempre que tengan su origen en la prestación de servicios por la empresa en concepto de comisión. Por último, hace una distinción para el caso de que la empresa venda tarjetas de crédito virtuales. De modo que, solo será considerado ingreso, a efectos de integrar la base imponible de este

⁷⁸De acuerdo con la Consulta Vinculante V2228-13, los *exchangers* se definen como «persona o empresa que se dedica a la compraventa e intercambio de esas "monedas", percibiendo por sus servicios una comisión. Su forma de trabajar es similar a las empresas dedicadas al cambio de divisas, con la peculiaridad de que las transacciones se realizan, generalmente por medios telemáticos».

⁷⁹De esta postura, DE MIGUEL, D. y RODRÍGUEZ, M., «Consideraciones tributarias generales sobre el bitcoin» en *CMS law* [consultado 28 de abril de 2019]. Disponible en: <https://cms.law/es/ESP/>.

impuesto, el importe de la contraprestación pactada con los particulares, quienes adquieren las tarjetas.

Para concluir, si bien la consulta no menciona nada al respecto, la doctrina⁸⁰ considera que será aplicable el tipo general de gravamen del 25% (*ex. art. 29.1 LIS*).

6. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA)

En lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido es necesario distinguir dos supuestos: i) operaciones de compraventa de / con criptomonedas; ii) minado de criptomonedas.

6.1 Compraventa de / con criptomonedas

La Sentencia de 22 de octubre de 2015, asunto C-264/14 (asunto Hedqvist), supuso un cambio interpretativo y de criterio por la DGT. Si bien ambos serán desarrollados con el fin de conocer la evolución en esta materia, de acuerdo con la jurisprudencia asentada por el TJUE, el criterio que opera actualmente es el segundo de ello.

A) Primera etapa: interpretación anterior al Asunto Hedqvist

La compraventa de criptomonedas fue calificada por la DGT, en varias Consultas Vinculantes (V1028-15, V1029-15, V2846-15), como una actividad sujeta y exenta a efectos de IVA. Lo más relevante de esta primera interpretación es que consideraba a las criptomonedas como efectos comerciales. Por ello, abogaba por aplicar la exención prevista para operaciones financieras del art. 20.1. 18º letras h) e i) LIVA en relación con las operaciones «relativas a transferencias, giros, cheques, libranzas, pagarés, letras de cambio, tarjetas de pago o de crédito y otras órdenes de pago».⁸¹ Así, las criptomonedas, entendidas como medio de pago a efectos fiscales, eran consideradas otras órdenes de pago al conferir un derecho de contenido económico y ser instrumentos de pago.

⁸⁰ Entre otros autores, DE MIGUEL, D. y RODRÍGUEZ, M., «Consideraciones tributarias generales sobre el bitcoin» en *CMS law* [consultado 28 de abril de 2019]. Disponible en: <https://cms.law/es/ESP/>.

⁸¹ Trasposición del art. 135.1.d) de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del IVA. Sin embargo, de acuerdo con la STJUE Asunto C-264/14, sería de aplicación la exención de la letra e) referente a divisas y medios de pago.

B) Segunda etapa: interpretación tras el Asunto Hedqvist

La irrupción que supuso la Sentencia de 22 de octubre de 2015, asunto C-264/14, fue el cambio en la consideración de las criptomonedas como divisas a efectos fiscales y no como otros efectos comerciales. Por lo que, la DGT modificó el criterio interpretativo seguido hasta entonces. Son tres las consultas Vinculantes dictadas tras la mencionada Sentencia, y en todas ellas se expresa que las «criptomonedas y demás monedas digitales son divisas por lo que los servicios financieros vinculados con las mismas están exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido en los términos establecidos en el artículo 20. Uno.18º de la Ley 37/1992». Por tanto, la compraventa de criptomonedas está sujeta a IVA, pero exenta.

En el supuesto de que el empresario solo realizase operaciones sujetas y exentas a IVA no estaría obligado a presentar declaraciones (*ex. art. 94.1 LIVA*).

Por último, se debe realizar una distinción, en función de si la criptomoneda es empleada como medio de pago o como instrumento financiero: i) si la compraventa es efectuada con criptomonedas, actuando estas como medio de pago, no estará sujeta a IVA (*ex. art. 7. 12º LIVA*); ii) las operaciones de intercambio de unas criptomonedas con otras o de estas con divisas reales, al ser consideradas operación financiera, si quien la realiza es un empresario, también estará exenta de IVA. En conclusión, en función de si la criptomoneda actúa como medio de pago o instrumento financiero, la operación estará no sujeta o exenta, respectivamente.

6.2 Minado

De acuerdo con la interpretación realizada por la DGT en la Consulta Vinculante V3625-16, la actividad de minado de criptomonedas no tiene carácter oneroso, debido a que, pese a existir una contraprestación por la actividad realizada, no es posible identificar al destinatario final o cliente. *A fortiori*, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE (Asuntos C-154/1980 y C-16/1993) para que exista onerosidad debe de haber una relación directa entre el servicio prestado y la contraprestación recibida; y en la actividad de minado no hay vinculación entre el proveedor del servicio (minero) y el destinatario, ni tampoco con la retribución percibida. Por tanto, la actividad de minado, con independencia de su remuneración, no queda sujeta a IVA, al carecer de carácter oneroso (*ex. art. 4.1 LIVA*).

Como sucedía con la compraventa de criptomonedas, el contribuyente no puede deducir las cuotas del IVA soportadas, al ser una operación no sujeta a IVA (*ex. art. 94.1 LIVA*).

De modo que, si un contribuyente se dedica al minado de criptomonedas, obteniendo durante el ejercicio 3.000 bitcoins por su actividad, los cuales vende para pagar el coste de energía eléctrica que le conlleva, se deben distinguir las operaciones efectuadas: i) minado no está sujeta a IVA por no ser una actividad onerosa; ii) venta de criptomonedas: operación sujeta a IVA, pero exenta (*ex. art. 20. Uno 18º LIVA*). Por otro lado, las operaciones no sujetas (minado) y operaciones sujetas y exentas (venta) no generan derecho a deducción de las cuotas soportadas (*ex. art. 94 LIVA*).

V. CONCLUSIONES

PRIMERA. De acuerdo con el Banco Central Europeo, las criptomonedas son una «representación del valor no emitido por un Banco Central ni por una autoridad pública, ni necesariamente asociada a una moneda fiduciaria, *que no posee el estatus legal de la moneda o el dinero*, empero es aceptado por personas físicas o jurídicas, *como medio de intercambio y posiblemente también para otros fines*, y que puede transferirse, almacenarse o negociarse por medios electrónicos».

SEGUNDA. No pueden ser calificadas como dinero de curso legal por los siguientes motivos: i) no tienen respaldo de una autoridad pública central que asegure su valor estable; ii) no son un medio de pago generalmente aceptado; iii) no existe una protección legal para los usuarios; iv) su volatilidad es muy elevada. Por tanto, no forman parte del sistema monetario, puesto que no son monedas oficiales ni dinero electrónico.

TERCERA. Pese a que fiscalmente en la Unión Europea las criptomonedas sean consideradas divisas electrónicas o virtuales (distintas a las divisas tradicionales), a efectos legales en materias diferentes a la tributaria, en España, son considerados por gran parte de la doctrina, bienes muebles de carácter digital, identificables, irrepetibles y susceptibles de valoración económica y propiedad privada.

CUARTA. Ante la ausencia de directrices y legislación específica en la Unión Europea, los Estados miembros han adoptado diferentes posturas: i) aquellos que han comenzado a regular a favor (v. gr.: Alemania, Estonia, Eslovenia, Dinamarca y Gran Bretaña); ii) aquellos que han comenzado a regular en contra del empleo de criptomonedas (v. gr.: Bélgica y Bulgaria); iii) aquellos que se mantienen a la espera de un régimen europeo de fiscalidad de criptomonedas (v. gr.: España).

QUINTA. A nivel europeo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de octubre de 2015, Asunto C-264/14, supuso una disrupción en el tratamiento fiscal de las criptomonedas, debido a que, se calificó por primera vez a las criptomonedas como divisa virtual. Como consecuencia, se modificó el criterio seguido por la DGT hasta entonces. Además, se concluyó que las operaciones de compraventa de criptomonedas estaban sujetas a IVA, pero exentas (*ex. art. 135.1 letra e*) de la Directiva del IVA).

SEXTA. Fuera de las fronteras de la Unión Europea tampoco existe acuerdo acerca de la naturaleza y tratamiento fiscal de las criptomonedas. Estados Unidos y Australia han elaborado normativa propia y específica. Así, Australia lidera la política tributaria en materia de criptomonedas al desarrollar una normativa completa desde el comienzo. En el lado opuesto, China o Tailandia, Islandia o Vietnam han prohibido su uso.

SÉPTIMA. En España ante la falta de regulación específica se debe aplicar el régimen fiscal actual con las adaptaciones e interpretaciones pertinentes y las dificultades que conlleva. Para ello, es necesario atender a los pronunciamientos de la DGT.

OCTAVA. Una de las mayores dificultades de las criptomonedas en aras de futura regulación fiscal es su valoración. Así, ante la falta de medios e información de la Administración Tributaria y, consecuentemente, de un criterio de valoración, los expertos en la materia consideran que, *a priori*, la solución más adecuada es valorar de acuerdo con la información de cotización y pagos realizados por el usuario, debiendo corregir las declaraciones anteriores, en las que no se incluyeron las operaciones realizadas en los ejercicios correspondiente, mediante complementarias.

NOVENA. Para la calificación fiscal de las criptomonedas es trascendental delimitar su uso en la operación concreta que se vaya a analizar. Así, en la UE las criptomonedas pueden ser empleadas como: i) medio de pago; ii) instrumentos de inversión o especulación; iii) medio de retribución.

DÉCIMA. En lo que respecta al IRPF, las rentas obtenidas de la compraventa de criptomonedas con dinero de curso legal serán consideradas rendimientos de actividades económicas, integrando la Base Imponible General, cuando cumplan los requisitos del art. 27.1 LIRPF. A sensu contrario, serán ganancias o pérdidas patrimoniales, valoradas por la diferencia entre el valor de adquisición y transmisión (*ex art. 34 LIRPF*). Los aspectos a tener en cuenta son los siguientes: i) se imputarán en el periodo impositivo en el que se haya producido la alteración patrimonial (*ex. art. 14 c*) LIRPF), esto es, el momento de la entrega de las criptomonedas (*ex. art. 609 CC*); ii) en el caso de

inversiones que hayan producido ganancias o pérdidas para el contribuyente, éstas se incorporan en la Base Imponible del Ahorro (*ex. art. 46 b LIRPF*). Si se hubiera obtenido una pérdida patrimonial se podrá compensar en el ejercicio correspondiente con otras ganancias patrimoniales obtenidas o en los 4 años siguientes (*ex. art. 49 LIRPF*); iii) los robos de criptomonedas serán una pérdida patrimonial que formará parte de la Base Imponible General. Su imputación solo podrá realizarse cuando la misma devenga judicialmente incobrable, se produzca una quita en un concurso de acreedores o haya pasado un año desde la reclamación judicial y; iv) para su cálculo se aplicará el principio contable FIFO.

Por otro lado, atendiendo a los criterios de la DGT, el intercambio de criptomonedas constituye una permuta (*ex. art. 1.538 CC*), por lo que, si se encuentra al margen de una actividad económica, será calificada como ganancia o pérdida patrimonial. Por último, la «recompensa» obtenida por las operaciones de minado, siempre que el contribuyente se dedique a ello de forma habitual desarrollando una actividad económica, se consideran ingresos recibidos como retribución, integrando la Base General y pudiendo minorar los gastos necesarios para el desarrollo de la actividad.

UNDÉCIMA. En relación al Impuesto sobre el Patrimonio, las criptomonedas se deberán valorar por su valor de mercado a 31 de diciembre (*ex. arts. 24 y 29 LIP*). Respecto a la obligación de presentar el modelo 720, no existe una solución por el momento, ya que la DGT todavía no se ha pronunciado y la doctrina se encuentra dividida.

DUODÉCIMA. En cuanto al Impuesto sobre Actividades Económicas, es de aplicación la regla de cierre 8ª de la Instrucción para la aplicación de las Tarifas, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1175/19990, de 28 de septiembre. Esta obligación tributaria se extiende al resto de actividades profesionales que se puedan realizar con las criptomonedas. En lo que respecta a las operaciones de intercambio (*trading*), solo serán consideradas actividades económicas cuando se gestionen carteras de activos de terceros. Por último, si el importe neto de la cifra de negocios inferior a un millón de euros se podrá aplicar la exención del art. 81 TRLRHL.

DECIMOTERCERA. De acuerdo con la DGT, las sociedades con residencia en territorio español dedicadas a operar con criptomonedas, son contribuyentes a efectos del IS (*ex. art. 7.1 a LIS*). Por tanto, las rentas obtenidas como consecuencia del desarrollo de tal actividad serán gravadas con el tipo general del 25% (*ex. art. 29 LIS*).

DECIMOCUARTA. En lo que respecta al IVA se diferencian dos supuestos: i) compraventa de / con criptomonedas; ii) minado de criptomonedas. En cuanto al primero, actualmente, de acuerdo con la citada jurisprudencia europea, la compraventa de criptomonedas está sujeta a IVA, pero exenta (*ex. art. 20.1. 18º LIVA*). Por otro lado, en la compraventa con criptomonedas, estas actúan como medio de pago, por lo que se trata de una operación no sujeta a IVA (*ex. art. 7. 12º LIVA*). Por último, el intercambio de unas criptomonedas con otras o de estas con divisas reales, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, al ser consideradas operación financiera, si quien la realiza es un empresario, también estará exenta de IVA. En lo que respecta al segundo de los supuestos, atendiendo a los criterios jurisprudenciales del TJUE, la DGT ha concluido que, al no tener carácter oneroso la actividad, debido a la imposibilidad de identificar el destinatario final, no está sujeta a IVA (*ex. art. 4.1 LIVA*).

DECIMOQUINTA. Debido a la proliferación del empleo de las criptomonedas en todos los sectores, parece evidente la necesidad de una regulación específica al respecto. No obstante, hasta que el legislador europeo y/o español den una solución al vacío legal existente, se deberá atender a los criterios jurisprudenciales de los Tribunales, así como a las resoluciones de la DGT para conocer el régimen tributario de aquellas operaciones afectadas por el empleo de criptomonedas. Ante tal situación, en los últimos meses, los Gobiernos europeos han mostrado un especial interés en cuanto a la elaboración de una legislación en un futuro próximo se refiere.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

FERNÁNDEZ BERMEJO, D. «*Blanqueo de Capitales y TIC: Marco Jurídico, Nacional y Europeo, Modus Operandi y Criptomonedas*», 1ª ed., Aranzadi, España, 2019.

FUNDACIÓN TELEFÓNICA., «*La Sociedad de la Información en España 2006*», Ariel SA, Barcelona, 2006, p. 158.

SIVAKUMAR BASHIR, *Criptomonedas: la guía definitiva para cadena de bloque (blockchain), minería y más* [libro electrónico], Babelcube, Inc., España, 2019 [consultado 3 de junio de 2019]. Disponible en: https://books.google.es/books?id=Vs6IDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

VÁZQUEZ TRAÍN, M. A., «*Impuesto sobre el valor añadido IVA*», 4ª ed., Tirant lo blanch, España, 2018.

WHITE, V., *Criptomonedas: comercio e inversión en Bitcoin, Litecoin y otras más* [libro electrónico], Babelcube Inc., España, 2019 [consultado el 16 de mayo de 2019]. Disponible en: <https://books.google.es/books?id=Zs6IDwAAQBAJ&lpg=PT23&dq=tecnologia%20blockchain%20definicion&hl=es&pg=PT23#v=onepage&q=tecnologia%20blockchain%20definicion&f=false>

REVISTAS

BARCIELA PÉREZ, J. A., «Bitcoin e IVA. El asunto Hedqvist», en *Quincena Fiscal* [revista electrónica], n. 14, 2016 [consultado 2 de abril de 2019]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5706214>

FERNÁNDEZ AMOR, J. A., «Efectos de un principio de justicia tributaria universal: evolución del establecimiento permanente a la presencia digital significativa en el marco de la economía colaborativa y social», en *Estudios. Fiscalidad de la Colaboración Social*, [revista electrónica], 2018. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6862814>

GAFI: «Monedas Virtuales Definiciones Claves y Riesgos Potenciales de LA/FT», en *Revista de Estabilidad Financiera* [revista electrónica], n. 32, 2017 [consultado 16 de marzo de 2019]. Disponible en: https://www.sib.gob.do/pdf/GAFI_PARA_MONEDA_VIRTUAL.pdf

GIL SORIANO, A. «Monedas virtuales: aproximación jurídico-tributaria y control tributario», en *Actualidad jurídica Uría Menéndez* [revista electrónica], n. 48, 2018 [consultado 21 de mayo de 2019]. Disponible en: https://www.uria.com/documentos/publicaciones/5803/documento/foro_esp_02.pdf?id=7879

GONZÁLEZ GRANADOS. J, «Retos del BitCoin y de la Blockchain», en VV AA, *Derecho digital: retos y cuestiones actuales*, Thomson Reuters Aranzadi [revista electrónica], 2018 [consultado 12 de marzo de 2019]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6426285>

LEGERÉN-MOLINA, A., «Retos jurídicos que plantea la tecnología de la cadena de bloques. Aspectos legales de *blockchain*», en *Revista de Derecho Civil* [revista electrónica], vol. VI, núm. 1 (enero-marzo, 2019) [consultado 2 de abril de 2019]. Disponible en: <http://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/view/356/337>

MORENO GONZÁLEZ. S., «Tributación indirecta del dinero virtual [Comentario a la Sentencia del TJUE de 22 de octubre de 2015, Skatteverket y David Hedqvist, C-264/14, (EU:C:215:718)]», en *Revista de Fiscalidad Internacional y Negocios Transnacionales Civil*, n. 2, 2016 [consultado 16 de marzo de 2019]. Disponible en:

MUÑOZ PÉREZ, A. F., «Criptomonedas», el «dinero mágico». Aspectos jurídicos», en *Revista de Derecho del Mercado de Valores* [revista electrónica], n. 21, 2017 [consultado 6 de junio de 2019]. Disponible en: <https://laleydigital.laley.es>

NAVAS NAVARRO. S., «Un mercado financiero floreciente: el del dinero virtual no regulado», en *Revista CESCO de Derecho de Consumo* [revista electrónica], n. 13, 2015 [consultado 2 de abril de 2019]. Disponible en: <https://revista.uclm.es/index.php/cesco/article/view/717/0>

NIETO GIMÉNEZ-MONTESINOS M.A. y HERNÁEZ MOLERA, J., «Monedas virtuales y locales: las paramonedas, ¿Nuevas formas de dinero?», en *Revista De Estabilidad Financiera*, [revista electrónica], n. 35, 2018 [consultado 12 de marzo de 2019]. Disponible en:

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/RevistaEstabilidadFinanciera/18/NOVIEMBRE/Monedas_virtuales_y_locales_las_par_amonedas.pdf

PASTOR SEMPERE, M. C., «Criptodivisas: ¿Una disrupción jurídica en la eurozona?», en *Revista de Estudios Europeos* [revista electrónica], n. 70, 2017 [consultado 16 de marzo de 2019]. Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0168_ES.html?redirect

PEDREIRA MENÉNDEZ, J. «Consideraciones sobre la tributación y la calificación contable de las operaciones con moneda digital (Bitcoins) en las empresas», en *Revista Quincenal Fiscal* [revista electrónica], n. 3, 2018 [consultado 28 de abril de 2019]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6287832>

PORXAS, N. y CONJERO, M., «Tecnología *Blockchain*: funcionamiento, aplicaciones y retos jurídicos», en *Actualidad jurídica Uría Menéndez* [revista electrónica], n. 48, 2018 [consultado 19 de mayo de 2019]. Disponible en: https://www.uria.com/documentos/publicaciones/5803/documento/foro_esp_02.pdf?id=7879

PUENTE GONZÁLEZ, I. A., «Criptomonedas: naturaleza jurídica y riesgos en la regulación de su comercialización», en *Revista de Derecho del Mercado de Valores* [revista electrónica], n. 22, 2018 [consultado 6 de junio de 2019]. Disponible en: <https://laleydigital.laley.es>

SÁNCHEZ, M., «Criptomonedas: funcionamiento y fiscalidad del “trending topic” en inversión», en *Actualidad Jurídica Aranzadi* [revista electrónica], nº 937, 2018 [consultado 4 de junio de 2019]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6294445>

LEGISLACIÓN

Directiva (UE) 2006/112/CE Del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.

Directiva (UE) 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades.

Directiva (UE) 2014/62 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo 2014 sobre la protección del euro y otras monedas contra la falsificación por la ley penal, y sustituye la Decisión marco 2000/383 / JAI del Consejo.

Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE.

Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.

Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico.

Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica la Directiva 2009/101/CE.

Real Decreto, de 24 de julio de 1889, por el que se publica el Código Civil.

Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Reglamento (CE) nº 974/98 del Consejo, de 3 de mayo de 1998, sobre la introducción del euro.

Texto refundido haciendas locales: Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Tratado de la Unión Europea.

JURISPRUDENCIA Y CONSULTAS VINCULANTES

Consulta Vinculante V0250-18.

Consulta Vinculante V0590-18.

Consulta Vinculante V0808-18.

Consulta Vinculante V0999-18.

Consulta Vinculante V1028-15.

Consulta Vinculante V1029-15.

Consulta Vinculante V1149-18.

Consulta Vinculante V1979-15.

Consulta Vinculante V2228-13.

Consulta Vinculante V2466-08.

Consulta Vinculante V2846-15.

Consulta Vinculante V2908-17.

Consulta Vinculante V3625-16.

Consulta Vinculante V6837-17.

Resolución de 11 de enero de 2019, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019.

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2018.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Quinta, de 22 de octubre de 2015, Asunto C-264/14 (Skatteverket / David Hedqvist).

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Quinta, de 14 de julio de 1998, Asunto C-172/96.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Tercera, de 27 de septiembre de 2007, Asunto C-409/04.

RECURSOS ELECTRÓNICOS

Banco de España (2017), «*Estabilidad del sistema financiero*» [consultado 8 de marzo de 2019]. Disponible en: http://aulavirtual.bde.es/wav/es/menu/estabilidad_fina/Estabilidad_del_8af3c721ff0b651.html

Comunicado conjunto de la CNMV y del Banco de España sobre “criptomonedas” y “ofertas iniciales de criptomonedas” (ICOs) [consultado 2 de abril de 2019]. Disponible en: https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/18/presbe2018_07.pdf

Comunicado difundido por la *Securities and Exchange Commission* con consideraciones de su presidente sobre las criptomonedas y las denominadas “ofertas iniciales de criptomonedas” (“*Initial Coin Offerings*” o “*ICOs*”) [consultado 2 de abril de 2019]. Disponible en: <https://www.bde.es/f/webbde/INF/MenuHorizontal/SalaDePrensa/20180115CNMVCOMUNICADOSEC.pdf>

CUATRECASAS, «*Blockchain*, admitido como medio de prueba en juicio en china» [consultado 16 de marzo de 2019]. Disponible en: <https://blog.cuatrecasas.com/propiedad-intelectual/blockchain-prueba-juicio-china/>

DE LA CUEVA GONZÁLEZ-COTERA, A. y GÓMEZ BARRERO, C. «La tributación del bitcoin y las criptomonedas en las personas físicas» en *El Derecho* [consultado 5 de abril de 2019]. Disponible en: www.elderecho.com,

DE MIGUEL, D. y RODRÍGUEZ, M., «Consideraciones tributarias generales sobre el bitcoin» en *CMS law* [consultado 28 de abril de 2019]. Disponible en: <https://cms.law/es/ESP/>.

DE MIGUEL, D., y RODRÍGUEZ M., «Consideraciones tributarias generales sobre el *Bitcoin*», en *CMS law*, n. 3, 2018.

Diario *Brussel Times* [consultado 4 de junio de 2019]. Disponible en: <https://www.brusselstimes.com>

Dictamen del Banco Central Europeo, de 12 de octubre de 2016, sobre una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica la Directiva 2009/101/CE [consultado 16 de marzo de 2019]. Disponible en: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_52016ab0049_es_txt.pdf

GOFORTH, C., «US Law: Crypto is Money, Property, a Commodity, and a Security, all at the Same Time», en *Oxford Business Law Blog* [consultado 5 de mayo de 2018]. Disponible en: <https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2018/12/us-law-crypto-money-property-commodity-and-security-all-same-time>

MAEZTU, D., «Tributación en IRPF (impuesto de la renta) de los cambios entre criptomonedas», en *451.legal.com* [consultado 28 de abril de 2019]. Disponible en: <https://451legal.com/tributacion-renta-cambios-criptomonedas/>

Opinion of the European Central Bank, of 12 October 2016, on a proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC [consultado 2 de abril de 2019]. Disponible en:

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/con_2016_49_with_technical_working_document.pdf

TRATNIK, K., «*Tax treatment of cryptocurrencies – what do you have to know*», [consultado 4 de junio de 2019]. Disponible en: <https://data.si/en/blog/tax-treatment-cryptocurrencies-slovenia/>

Uniform Regulation of Virtual-Currency Businesses Act Offers States Regulatory Framework for the Virtual Currency Industry [consultado 28 de abril de 2019]. Disponible en: http://www.burr.com/wp-content/uploads/2018/01/Blog_Uniform-Regulation-of-Virtual-Currency-Businesses-Act-Offers-States-Regulatory-Framework-for-the-Virtual-Currency-Industry.pdf

Web oficial de Abogados Lorente Lorente (traducción del documento alemán del Ministerio Federal de tributación de criptomonedas) [consultado 4 de junio de 2019].

Disponible en: <http://www.lorenteylorente.es/2018/03/analisis-tributacion-bitcoin-en-alemania/>

Web oficial de *IG Group Limited* España [consultado 4 de junio de 2019]. Disponible en: <https://www.ig.com/es/estrategias-de-trading/la-regulacion-de-criptomonedas-alrededor-del-mundo-181107>

Web oficial de la Agencia Tributaria de Bulgaria [consultado 4 de junio de 2019]. Disponible en: <https://nap.bg/en/>

Web oficial de la Agencia Tributaria de Reino Unido [consultado 4 de junio de 2019]. Disponible en: <https://www.gov.uk/government/publications/tax-on-cryptoassets/cryptoassets-for-individuals>

Web oficial de *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws* [consultado 4 de junio de 2019]. Disponible en: <http://www.uniformlaws.org/home>.